Proyecto de Ley N°.....5636/2023-PE

CONGRESO DE LA REPUBLICA
Área de Trámite y Digitalización de Documentos
28 JUL. 2023
RECIBIDO
Firma: Hora 13:40

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 28 de julio de 2023

OFICIO Nº 246 -2023 -PR

Señor
ALEJANDRO SOTO REYES
Presidente del Congreso de la República
Presente. -

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107º de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable.

Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de URGENTE, según lo establecido por el artículo 105° de la Constitución Política del Perú.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra consideración.

Atentamente,

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Consejo de Ministros

REPÚBLICA DEL PERÚ

Ley

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA ASEGURAR EL ACCESO UNIVERSAL AL AGUA POTABLE

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto establecer las medidas destinadas a asegurar el acceso universal al agua potable, prioritariamente, para la población que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2.1 La presente Ley es de alcance para la población sin acceso al agua potable en los ámbitos urbano y rural a nivel nacional, prioritariamente, que se encuentre en condición de pobreza o vulnerabilidad.

2.2. Asimismo, es de aplicación para las siguientes entidades:

a. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y sus programas.
b. El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS.
c. Los Gobiernos Regionales.
d. Los Gobiernos Locales.
e. Autoridades de salud.
f. Los prestadores de los servicios de saneamiento.

Artículo 3. De las intervenciones

3.1 Las intervenciones a realizar para el acceso universal al agua potable comprenden infraestructura, equipamiento e insumos implementados mediante opciones tecnológicas convencionales y no convencionales que buscan asegurar la dotación de agua potable, incluyendo la operación y mantenimiento. Estas intervenciones son de carácter temporal y se mantienen hasta la prestación de los servicios de saneamiento, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley.

3.2 La ejecución de las intervenciones para el acceso universal al agua potable se realizan en los ámbitos geográficos que no constituyan zonas de riesgo no mitigable

EXP. 16877

declaradas por la autoridad competente, así como considerando la pertinencia cultural y la oferta hídrica disponible, de conformidad con lo previsto en el reglamento de la presente ley; en el cual se pueden establecer condiciones adicionales para tal efecto.

3.3. La ejecución de las intervenciones se realiza prioritariamente en bienes de dominio del Estado. Excepcionalmente, de mutuo acuerdo y previa suscripción de convenio, se pueden ejecutar intervenciones en bienes de dominio privado de terceros. El presente párrafo se implementa considerando lo establecido en las normas aplicables para la disposición de bienes inmuebles.

3.4. El costo de las intervenciones es financiado total o parcialmente por el Estado. En caso los beneficiarios no se encuentren en condición de pobreza o vulnerabilidad, el costo de las intervenciones puede ser asumido por estos. El reglamento de la presente ley desarrolla lo dispuesto en el presente párrafo.

3.5. La responsabilidad de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y de los gobiernos locales competentes por la intervención, alcanza hasta la entrega al beneficiario del agua potable y/o del equipamiento necesario; así como, hasta mantener en condiciones óptimas la infraestructura y/o equipamiento instalado.

3.6 Los activos resultantes de las intervenciones son de titularidad de las EPS y/o de los gobiernos locales competentes.

3.7 La articulación entre entidades e intervenciones a realizar se desarrolla en el Reglamento de la presente Ley, el Plan Nacional de Saneamiento y los Planes Regionales de Saneamiento.

3.8 Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y los gobiernos locales se encuentran facultados para suscribir convenios de colaboración interinstitucional con el OTASS y los Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la ejecución de intervenciones hasta la entrega del activo, de conformidad con el Reglamento de la presente Ley.

3.9 Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, se establece en el reglamento de la presente Ley, la definición y alcance de las intervenciones; identificación de la población objetivo; definición del criterio de temporalidad, responsabilidades en la ejecución de las intervenciones; procesos de coordinación con los Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la programación, identificación de temporalidad y el reporte de ejecución de las intervenciones; y el esquema de seguimiento de la implementación y contribución al logro de resultados del sector saneamiento.

Artículo 4. Calidad del agua potable

4.1 Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, la calidad del agua debe cumplir con la normativa sobre calidad del agua para consumo humano emitida por la autoridad nacional de salud.

4.2 La autoridad de salud competente se encarga de la vigilancia y fiscalización de lo establecido en el párrafo precedente, ejerciendo su función sancionadora en los casos que corresponda.

4.3 Los gobiernos locales competentes deben informar a la autoridad de salud local la sectorización de la distribución del agua en su territorio.

REPÚBLICA DEL PERÚ

Ley

Artículo 5. Reconocimiento de organización de beneficiarios

5.1 Los beneficiarios que se organicen para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, adquieren personería jurídica de derecho privado desde su reconocimiento por parte de los gobiernos locales competentes, no siendo exigible su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

5.2 Previo a la intervención a ejecutar, la organización de beneficiarios suscribe, con la EPS o gobierno local competente, los respectivos convenios para el acceso al agua potable. El reglamento de la presente Ley regula los derechos y obligaciones de la organización de beneficiarios, así como su organización y funcionamiento.

Artículo 6. Intervención en el ámbito urbano

6.1 En el ámbito urbano la ejecución de las intervenciones para asegurar el acceso universal al agua potable es de responsabilidad de las EPS dentro de su ámbito de responsabilidad, y de los gobiernos locales competentes en su respectiva jurisdicción, en colaboración con los prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito urbano.

6.2 Las intervenciones a realizarse en el ámbito urbano se orientan a asegurar una dotación mínima expresada en litros por persona por día (lpd), conforme a lo establecido en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 7. Retribución en el ámbito urbano

7.1 La retribución por la dotación de agua potable es equivalente a la tarifa establecida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) para cada prestador de servicios de saneamiento en el ámbito urbano. Dicha retribución puede ser asumida total o parcialmente por el beneficiario.

7.2 El reglamento de la presente Ley establece la forma de retribución en el ámbito urbano, incluyendo las excepciones que correspondan.

Artículo 8. Intervención en el ámbito rural

8.1 En el ámbito rural, la ejecución de las intervenciones para asegurar el acceso universal al agua potable es de responsabilidad de los gobiernos locales competentes, en su respectiva jurisdicción, en colaboración con los prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural.

8.2 Las intervenciones a realizarse en el ámbito rural se orientan a asegurar una dotación mínima expresada en litros por persona por día (lpd), conforme a lo establecido en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 9. Retribución en el ámbito rural

9.1 La retribución por la dotación de agua potable es determinada por el gobierno local competente. Dicha retribución puede ser asumida total o parcialmente por el beneficiario.

9.2 El reglamento de la presente Ley establece la forma de retribución en el ámbito rural, incluyendo las excepciones que correspondan.

Artículo 10. Implementación y financiamiento

La implementación de las intervenciones en el marco de lo dispuesto en la presente Ley, así como su financiamiento total o parcial, se realiza a través del Fondo de Inversión Agua Segura – FIAS, cuya creación se dispuso mediante el Decreto Legislativo N° 1284.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Reglamentación

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprueba mediante Decreto Supremo el reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario, contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial El Peruano.

SEGUNDA- Beneficiarios de interés social

Excepcionalmente, en adición a lo dispuesto en el numeral 2.1 del artículo 2 de la presente Ley, la presente es aplicable para las instituciones educativas, establecimientos de salud y viviendas de interés social que no cuenten con acceso al agua potable, sujeto a la disponibilidad presupuestaria del sector competente. El Reglamento de la presente Ley regula lo dispuesto en la presente disposición.

TERCERA. Acciones complementarias de implementación

Los Gobiernos Locales, los Gobiernos Regionales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y sus programas, y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, efectúan las acciones necesarias para la implementación de lo dispuesto en la presente Ley.

CUARTA. Aplicación a prestadores excepcionales

Las disposiciones contenidas en la presente Ley referidas a EPS son de aplicación a los prestadores regulados en la Vigésimo Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

QUINTA. Almacenamiento seguro de agua potable

Se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS y a los Gobiernos Regionales, a dotar de equipamientos que coadyuven a garantizar el almacenamiento y traslado seguro de agua potable para la población que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad, en el marco del acceso universal establecido en la presente Ley. El Reglamento de la presente Ley desarrolla lo dispuesto en la presente disposición.

SEXTA. Implementación progresiva

La implementación de las intervenciones para el acceso universal al agua potable, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, se realiza de manera progresiva, sujeta a disponibilidad presupuestaria; para lo cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprueba la estrategia sectorial para garantizar el acceso universal al agua potable, así como una estrategia multisectorial para la identificación de fuentes de agua para su potabilización.

REPÚBLICA DEL PERÚ

Ley

SÉTIMA. Fortalecimiento para la conservación de recursos hídricos

La Autoridad Nacional del Agua vela por la protección y conservación de sus fuentes naturales de agua y promueve la remediación de la afectación de la calidad de los recursos hídricos. Para tal efecto, adopta, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las acciones necesarias para la implementación de lo dispuesto en la presente Ley.

OCTAVA. Disposiciones para la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna

1. Se autoriza a las EPS, hasta el Año Fiscal 2026, a realizar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna, a la población del ámbito urbano que no cuente con acceso al servicio de agua potable y que se encuentre en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. El reglamento de la presente ley desarrolla lo dispuesto en el presente párrafo, de conformidad con la estrategia sectorial para garantizar el acceso universal al agua potable.

2. Se faculta al Ministerio de Salud para que, en un plazo de ciento veinte (120) días calendario, contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, apruebe el procedimiento de autorización sanitaria temporal para la distribución gratuita del agua para consumo humano a través de camiones cisternas.

NOVENA. Adecuación

En un plazo de ciento veinte (120) días calendario, contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, el Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-VIVIENDA.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Modificación de los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura

Modifícanse los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura, los mismos que quedan redactados en los siguientes términos:

"Artículo 1. Creación y Finalidad del Fondo

Créase el Fondo de Inversión para el Acceso al Agua Potable y a los Servicios de Saneamiento - FIAS, dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, con la finalidad de financiar total o parcialmente:

1. *Las intervenciones que aseguren el acceso universal al agua potable para la población, prioritariamente, que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad.*
2. *Las inversiones, programas y/o actividades orientadas, según sea el caso, para el cierre de brechas de cobertura y calidad de los servicios de saneamiento, así como a la mejora en la eficiencia, sostenibilidad y equidad de la prestación de tales servicios en los ámbitos urbano y rural."*

"Artículo 2. Destino de los recursos del FIAS

2.1. Con los recursos del FIAS se financia lo siguiente:

1. *Inversiones para el sector saneamiento en la ejecución de obras de infraestructura y aquellas requeridas para la implementación de la hoja de ruta de economía circular, adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres y conservación de fuentes de agua.*
2. *Actividades de operación, mantenimiento correctivo y preventivo para los sistemas del servicio de agua potable y saneamiento, y gestión de sostenibilidad del FIAS.*
3. *Actividades vinculadas al fortalecimiento de capacidades de los prestadores a través de los gobiernos locales y empresas prestadoras de servicios de saneamiento, de los ámbitos urbano y rural, hasta con el 5% de los recursos del FIAS.*
4. *Intervenciones para asegurar el acceso universal al agua potable en los ámbitos urbano y rural.*
5. *Otras que determine el Reglamento de la presente norma.*

2.2. Las transferencias que se efectúen con recursos del FIAS a favor de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento adoptan la modalidad de aporte de capital ordinario o preferente, según las condiciones y procedimientos que establezca el Reglamento de la presente norma; a excepción de lo dispuesto en el inciso 4 del párrafo precedente.

2.3. Las transferencias que se efectúen con recursos del FIAS a favor de los gobiernos locales adoptan la modalidad de subvención, cuyo porcentaje, condiciones, entre otros, se establecen en el Reglamento de la presente norma. Esto también es aplicable para las EPS, en lo referido al inciso 4 del párrafo 2.1 del presente artículo."

"Artículo 3. Fuentes del FIAS

3.1. Las fuentes de recursos del FIAS pueden ser las siguientes:

1. Transferencias financieras del MVCS y del OTASS en favor de las EPS, se aprueban mediante *Resolución del titular del pliego respectivo previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto de la Entidad o la que haga sus veces y acorde al monto máximo autorizado en las leyes anuales de presupuesto. Para tal fin se autoriza a los respectivos pliegos presupuestales a realizar transferencias financieras a favor del "Fondo de Inversión Agua Segura" con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.*
2. *Créditos de entidades de cooperación nacional, internacional o de instituciones financieras, preferentemente en soles, de acuerdo a la normatividad vigente.*
3. *Donaciones o transferencias provenientes de entidades públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras, según la normativa vigente.*

REPÚBLICA DEL PERÚ

Ley

4. *Recargo tarifario en la facturación mensual de hasta el 4% en promedio para los usuarios pertenecientes a la clase no residencial a que se refiere el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por empresas prestadoras de servicios de saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD o norma que la sustituya. El recargo tarifario a que hace referencia el presente inciso, se aprueba mediante Decreto Supremo refrendado por los/las titulares del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de la Presidencia del Consejo de Ministros, en este último caso, con opinión previa favorable de la SUNASS.*
5. *Recargo tarifario en la facturación mensual de hasta el 3% en promedio para los usuarios pertenecientes a la clase residencial a que se refiere el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por empresas prestadoras de servicios de saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD o norma que la sustituya. El recargo tarifario a que hace referencia el presente inciso, se aprueba mediante Decreto Supremo refrendado por los/las titulares del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de la Presidencia del Consejo de Ministros, en este último caso, con opinión previa favorable de la SUNASS.*
6. *Otras fuentes de financiamiento permitidas por la normatividad vigente.*

3.2. Los recursos del FIAS, los intereses que devenguen y los recursos captados por la ejecución de garantías en la aplicación del artículo 9 de la presente Ley, tienen carácter intangible e inembargable, y se destinan única y exclusivamente a los fines a que se refiere la presente Ley. Los recursos del FIAS se depositan en la cuenta que determine la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas."

*"**Artículo 7.- Del uso de los recursos***
Los recursos del FIAS, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se determinan en las leyes anuales de presupuesto según las fuentes de financiamiento señaladas en el artículo 3 de la presente Ley.

En el caso de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, el MVCS queda autorizado para efectuar transferencias financieras, que se aprueban mediante resolución del Titular del MVCS, a favor de dichas empresas, acorde a los montos máximos que se dispongan en las leyes de presupuestos anuales."

"Artículo 8. Participación de los Programas del MVCS
En las operaciones señaladas en el artículo 2, el FIAS puede solicitar opinión técnica de los Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en materia

de acceso universal al agua potable y servicios de saneamiento sobre las solicitudes de financiamiento, de acuerdo con su ámbito de acción."

SEGUNDA. Incorporación de los artículos 10 y 11 del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura

Incorpóranse los artículos 10 y 11 del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura, los mismos que quedan redactados en los siguientes términos:

"Artículo 10.- Autorización excepcional

10.1. Autorizase al MVCS para que a través del FIAS reciba, adicionalmente, los siguientes recursos:

1. *Los efectuados por las empresas prestadoras de servicios de saneamiento que recauden por la aplicación de subsidios cruzados entre empresas prestadoras determinados por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass, en atención a lo dispuesto en el párrafo 183.2 del artículo 183 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, o la norma que haga sus veces.*

2. *Los efectuados por las instituciones públicas o privadas que decidan realizar transferencias financieras a través del FIAS a favor de una determinada empresa prestadora de servicios de saneamiento o gobierno local, conforme a lo señalado en el artículo 2 de la presente Ley.*

3. *Los recursos transferidos para la implementación de lo dispuesto en el Título III del Decreto Legislativo N° 1359, Decreto Legislativo que establece medidas para el saneamiento financiero sobre las deudas de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal.*

10.2. Los recursos a que se refieren los numerales precedentes se registran en contabilidad separada hasta la entrega al beneficiario, y se destinan única y exclusivamente a los fines para los que fueron creados o transferidos."

"Artículo 11.- Transparencia

El MVCS, a través del Consejo Directivo, en su condición de máxima autoridad del FIAS, presenta a la Contraloría General de la República, en un plazo máximo de noventa (90) días hábiles contado a partir del cierre de cada ejercicio anual, un informe sobre la aplicación y ejecución del fondo, el mismo que se publicará en su portal institucional."

Comuníquese a la señora Presidenta Constitucional de la República para su promulgación,

En Lima, a los

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Consejo de Ministros

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA ASEGURAR EL ACCESO UNIVERSAL AL AGUA POTABLE

I. ANTECEDENTES

El agua potable es indispensable para la vida y la salud; y fundamental para la dignidad de toda persona. En ese sentido, en 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó su Observación General N° 15 sobre el derecho al agua, en la que este derecho se definió como el derecho de todos "*a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.*"

Asimismo, el Objetivo N° 6 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), acordado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es "*Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos*", teniendo como meta, entre otros, que para el año 2030 se logre el acceso universal y equitativo al agua potable; dado que, si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso al agua potable y saneamiento, existen miles de millones de personas que aún carecen de estos servicios básicos. En todo el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre (Naciones Unidas, 2023).

Dicha situación no es ajena a nuestro país, debido a que 1.9 millones de personas en el ámbito urbano no tienen acceso al agua potable por red pública, mientras que 1.5 millones de personas en el ámbito rural tampoco tienen acceso al mencionado servicio de saneamiento. Sobre el servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas, en el ámbito urbano 3.5 millones de personas no cuentan con el mencionado servicio, mientras que 4.1 millones de personas en el ámbito rural tampoco cuentan con el mencionado servicio (ENAPRES, 2022).

Bajo el contexto antes expuesto, las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional en el Perú establecen la Política de Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social, que tiene entre sus objetivos, ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento básico y controlar los principales contaminantes ambientales.

Para tal efecto, el Estado viene cerrando brechas de acceso a través de la cobertura de los servicios de saneamiento a fin de lograr el "servicio universal", conforme al marco normativo legal, Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, Ley Marco), aprobado en el año 2016.

No obstante, el marco normativo constitucional, aprobado en el año 2017, dispone en el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable.

Así pues, el Tribunal Constitucional precisa que el acceso, la calidad y la suficiencia son requisitos mínimos del derecho al agua potable. En el caso del acceso, señala que desde el Estado deben crearse, directa o indirectamente, condiciones de acercamiento del recurso líquido a favor del destinatario a nivel físico, económico y sin discriminación.

Conforme a lo indicado anteriormente, resulta necesario contar con un marco normativo que desarrolle el concepto de "acceso universal", el cual permitirá dotar de agua potable a través de opciones convencionales y no convencionales, de carácter temporal, a las personas que no cuentan con acceso al servicio de agua potable.

II. PROBLEMA PÚBLICO

El problema público del limitado acceso al servicio de agua potable, prioritariamente, para la población que se encuentra en condición de pobreza[1] o vulnerabilidad[2], tiene como consecuencia la elevación de la morbilidad y mortalidad infantil por enfermedades diarreicas aguda y anemia; todo ello causado principalmente por el alto crecimiento urbano, la limitada capacidad de implementación de inversiones que atienda a la población de los ámbitos urbanos y rurales y la limitada aplicación de las opciones tecnológicas no convencionales para el acceso al servicio de agua potable.

Asimismo, el limitado acceso al servicio de agua potable eleva la morbilidad y mortalidad infantil por enfermedades diarreicas agudas (EDA) y anemia; la afectación en el desarrollo de la población, en especial en niñas y niños; la pérdida de recursos económicos por la atención innecesaria en salud; y, la afectación del desarrollo económico. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2021 el porcentaje de menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores tuvieron EDA fue de 12.4%, mientras que el porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con prevalencia de anemia fue de 38.8%. Estos problemas se reducirían en gran parte mediante la masificación del acceso al servicio de agua potable, la cual permitiría reducir la incidencia de EDA en 37% (WHO,2008)[3] y de anemia en 43% (BID, 2018)[4].

Cabe destacar que, tanto las EDA como la anemia afectan negativamente el estado nutricional de los niños y niñas mediante la reducción de la ingesta de alimentos, la reducción de la capacidad de absorción del intestino, el aumento del catabolismo y la eliminación de nutrientes esenciales que requieren para el crecimiento.

En ese sentido, el limitado acceso al servicio de agua potable es un factor que explica la desnutrición crónica infantil, la cual tiene efectos negativos inmediatos como la mayor probabilidad de ocurrencia de otras enfermedades o muerte prematura en niños y niñas menores de cinco años; y efectos a largo plazo en el desempeño escolar, la capacidad de trabajo, además de ocasionar costos y pérdidas económicas a la familia, al gobierno y la sociedad.

En la Tabla N° 1 se muestra el problema público y las causas que lo determinan:

Tabla N° 1: Problema público y sus causas

Problema público	Causas
Limitado acceso al servicio de agua potable	Alta explosión demográfica del crecimiento poblacional en el ámbito urbano.
	Elevados costos de inversión para la provisión de servicios de agua potable.
	Limitada aplicación de las opciones tecnológicas no convencionales para el acceso al servicio de agua potable.

III. ANÁLISIS DE LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD

El artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. De igual

[1] Para la presente norma se utiliza el enfoque monetario absoluto y objetivo de la pobreza (en adelante "enfoque de pobreza"). Según esta noción, se considera pobre a todas las personas residentes en hogares particulares, cuyo gasto per cápita valorizado monetariamente, no supera el umbral de la línea de pobreza (Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022 - Informe Técnico, p. 9). En ese sentido, la línea de Pobreza es el valor de la línea de Pobreza Extrema más el valor monetario necesario para satisfacer un conjunto de necesidades no alimentarias consideradas esenciales (transporte, vestimenta, vivienda, educación, salud, recreación, muebles del hogar, entre otros). Además, la línea de Pobreza Extrema es un valor monetario necesario para la adquisición de una canasta de alimentos capaz de satisfacer un mínimo de necesidades nutricionales de las personas. Asimismo, el INEI establece anualmente a cuánto asciende el monto de dichas líneas de pobreza y pobreza extrema. De esta manera, este el enfoque de pobreza utilizado en la presente norma incluye tanto a los individuos pobres como a los pobres extremos.

[2] Por otro lado, se precisa que cuando se expone sobre la población vulnerable, se hace referencia exclusivamente a la población no pobre vulnerable, la cual es aquella cuyo gasto per cápita supera el umbral de la pobreza monetaria (que son considerados técnicamente como no pobres), pero se encuentran, en riesgo de caer en pobreza ante cualquier cambio de las condiciones de la economía (Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022 - Informe Técnico, p.59).

[3] WHO (2008). "Water quality interventions to prevent diarrhea: Cost and cost-effectiveness".

[4] BID (2018). Los súper héroes del desarrollo en el Perú.

modo, el artículo 7-A de la Carta Magna[5] dispone de manera expresa que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable; en ese sentido, el Estado debe garantizar este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos, y promoviendo el manejo sostenible del agua[6].

En concordancia con el mandato constitucional, el Tribunal Constitucional señaló en su oportunidad, que corresponde al Estado, dentro de su inobjetable rol social y en razón de su objetivo primordial de protección del ser humano y su dignidad, fomentar que el agua potable se constituya no sólo en un derecho de permanente goce y disfrute, sino a la par, en un elemento al servicio de un interminable repertorio de derechos, todos ellos de trascendencia para la realización plena del individuo[7].

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

De la problemática expuesta, se verifica que es necesario contar con una norma que permita asegurar el acceso universal al agua potable, por ser un derecho humano indispensable para una vida humana digna, por lo que desarrollaremos por articulado la propuesta normativa:

Sobre el artículo 1 de la Ley

> ***Artículo 1. Objeto de la Ley***
> *La presente Ley tiene por objeto establecer las medidas destinadas a asegurar el acceso universal al agua potable, prioritariamente, para la población que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad.*

El artículo 25° de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala lo siguiente:

> *"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; […]."*

Según el Tribunal Constitucional (TC) "*la prestación de los servicios sociales básicos necesarios para la supervivencia de todo ser humano se encuentran implícitos en las obligaciones contraídas por el Estado peruano al ratificar la referida declaración, lo que implica adoptar las disposiciones de derecho interno que correspondan y, de esta manera, buscar hacer efectivos los derechos vinculados con dichas prestaciones.*"

El marco normativo -a nivel constitucional- dispone en el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable[8].

Ahora, -señala el TC- si bien tal positivización no garantiza la plena efectividad de este derecho fundamental, ello resulta necesario para que los actores políticos adopten providencias a nivel interno y, de esta manera, nos acerquemos a una materialización

---

[5] Incorporado mediante Ley N° 30588, Ley de Reforma Constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho fundamental.

[6] El agua es un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la nación.

[7] Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente STC N° 6534- 2006-AA/TC, fundamento 18. Disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/06534-2006-AA.pdf

[8] **CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993**
"Artículo 7-A.- El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos.
El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y, como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible.
Nuestra Constitución no recogía inicialmente el derecho al agua potable, por lo que el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia 06534-2006-PA/TC, publicada en la web institucional el 22 de febrero de 2008, dejó sentado que *"[…] aunque dicho atributo no se encuentra considerado a nivel positivo, existen no obstante una serie de razones que justifican su consideración o reconocimiento en calidad de derecho fundamental. Asumir dicha premisa supone perfilar su individualización dentro del contexto que ofrecen algunas de las perspectivas anteriormente enunciadas. A tales efectos, atendiendo a que no existe norma expresa que contenga dicho reconocimiento a nivel interno y a que a nivel internacional aún se encuentran pendientes de desarrollo muchos de los ámbitos que comprendería dicho atributo, puede acudirse primeramente a la opción valorativa o principialista y a la cláusula de los derechos implícitos que le permite servir de referente. Así las cosas, la utilización de la fórmula de individualización permitiría legitimar la existencia de un derecho al agua potable en calidad de atributo fundamental no enumerado. Su reconocimiento se encontraría ligado directamente a valores tan importantes como la dignidad del ser humano y el Estado social y democrático de derecho"* [fundamento 17].

progresiva del derecho en cuestión, cumpliendo, a su vez, con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en esta materia (tanto en su dimensión formal como material).

En ese mismo sentido, el TC precisa **que el acceso**, la calidad y la suficiencia son requisitos mínimos del derecho al agua potable. Así, en el **caso del acceso**, señala que desde el Estado deben crearse, directa o indirectamente, condiciones de acercamiento del recurso líquido a favor del destinatario a nivel físico, económico y sin discriminación[9].

Por lo expuesto, existe marco constitucional que justifica la presente Ley, el cual tiene por objeto introducir el concepto de **"acceso universal"** al agua potable, el cual consiste en -según este nuevo marco normativo- dotar agua potable, prioritariamente, a la población que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad a través de tecnologías convencionales y no convencionales, de carácter temporal. El acceso universal al agua potable implica garantizar la accesibilidad, asequibilidad y calidad del agua potable.

Asimismo, el presente marco legal regula medidas orientadas a asegurar el **"acceso universal"** al agua potable, tales como:

i) establecer competencias de entidades públicas en el ámbito urbano y rural;
ii) la forma en la que se dotará el agua potable (intervenciones);
iii) asegurar el nivel de calidad del agua potable, así como la entidad competente para su supervisión, fiscalización y sanción;
iv) la retribución por la dotación de agua potable; y,
v) el financiamiento de las intervenciones.

De otro lado, resulta oportuno distinguir entre el objeto de la presente Ley y el de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1280 **(Ley Marco)**. Sobre el particular, esta Ley regula la dotación de agua potable a través de intervenciones alternativas temporales, principalmente, a través de opciones tecnológicas no convencionales; mientras que, la Ley Marco regula la prestación de los servicios de saneamiento -entre ellos, el servicio de agua potable- a través de inversiones definitivas a favor de todos/as los/as peruanos/as.

En ese sentido, la presente Ley no se contrapone con la Ley Marco, pues la primera de estas realizará las intervenciones necesarias para dotar de agua potable a la población que carece de acceso al servicio de agua potable; siendo que, estas intervenciones se mantendrán hasta la ejecución de las inversiones definitivas que permitan la prestación de los servicios de saneamiento, regulados en la Ley Marco y su reglamento.

En otras palabras, respecto a una persona que no cuenta con servicios de saneamiento, la presente norma le permitirá acceder al agua potable; mientras que, en cumplimiento de la Ley Marco, se ejecutan las inversiones para que dicha persona cuente con los servicios de saneamiento.

Tabla N° 2: Principales diferencias entre acceso universal y servicio universal de agua potable

Acceso universal	Servicio universal
Aplica para zonas donde no hay conexión a redes de agua potable y alcantarillado.	Aplica para zonas donde exista redes de agua potable y alcantarillado.
Es de carácter temporal.	Es de carácter definitivo.
Se realiza a través de intervenciones de	Se realiza a través de inversiones, cuyo proceso

[9] Sentencia 6534-2006-PA/TC, fj 21 a 25

rápido impacto, con menores plazos.	de ejecución requiere mayores plazos.
Se prioriza el uso de opciones tecnológicas no convencionales.	Aplica el DL N° 1280 (Ley Marco) y su Reglamento.
Dotación de agua potable entre 20 a 50 litros por persona (lpd).	Dotación de agua potable, de acuerdo al RNE (Entre 100 a 220 lpd)

Elaboración: Dirección de Saneamiento

Se puede inferir de lo expuesto hasta aquí que, la presente Ley permitirá que el Estado Peruano cumpla con sus obligaciones internacionales y nacionales de brindar el acceso universal al agua potable a la población que no cuenta con dicho recurso líquido. Es preciso señalar que las acciones que se llevarán a cabo bajo el marco de la presente Ley prioriza de manera transversal a la población que se encuentre en condición de pobreza o vulnerabilidad.

Asimismo, cabe indicar que, es difícil que todas las diversas exigencias derivadas del "acceso universal" al agua potable puedan cumplirse inmediatamente y al mismo tiempo, por lo que las intervenciones deberán realizarse de manera gradual. En ese sentido, en el Reglamento de la presente Ley se debe evaluar las características particulares de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, que sirvan para la inclusión de criterios adicionales de priorización en grupos de mayor riesgo o inequidad.

Al respecto, tanto la limitada disponibilidad de recursos, como la gran cantidad de necesidades insatisfechas y crecientes exigencias vinculadas con el "acceso universal" al agua potable hacen que en los hechos este derecho sea susceptible de una concreción progresiva; por ello, es que la Ley está priorizando a la población que se encuentre en condición de pobreza o vulnerabilidad, de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente.

Imagen: con Acceso al agua potable



Elaboración: Dirección de Saneamiento

Como puede colegirse, a la fecha ninguna entidad realiza intervenciones relacionadas con el acceso universal; salvo casos excepcionales, como son las habilitaciones por declaración de emergencia o urgencia.

Así pues, el alcance de los programas del MVCS (Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU y Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR) es ejecutar o financiar **soluciones definitivas**, así como promover mejoras **en la prestación de servicios de saneamiento** según su ámbito (urbano y rural). En esa línea, los Programas Presupuestales 0082 y 0083 del PNSU y PNSR son programas presupuestales vinculados con los servicios de saneamiento.

Por lo tanto, no existirá duplicidad entre las intervenciones que ejecutarán las entidades en mérito al presente Proyecto de Ley con las que vienen ejecutando en el cumplimiento de la Ley Marco de servicios de saneamiento.

Finalmente, es preciso señalar que las acciones que se llevarán a cabo bajo el marco de la presente Ley, priorizarán de manera transversal a la población que se encuentre en condición de pobreza o vulnerabilidad.

Asimismo, cabe indicar que, es difícil que todas las diversas exigencias derivadas del acceso universal al agua potable pueden cumplirse inmediatamente y al mismo tiempo, por lo que las intervenciones deberán realizarse de manera gradual. En ese sentido, en el Reglamento de la presente ley se debe evaluar las características socio culturales particulares de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, que sirvan para la inclusión de criterios adicionales de priorización en grupos de mayor riesgo o inequidad, tales como los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano, personas con discapacidad, mujeres, entre otros.

Sobre el particular, de acuerdo con información de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura, los pueblos indígenas u originarios son grupos en situación de vulnerabilidad. Actualmente el 38.5% de la población indígena u originaria en el Perú se encuentra en situación de pobreza, mientras que, el 8.7% se encuentra en situación de pobreza extrema.

De acuerdo con la ENAHO 2020, el 15.9% de la población que habla quechua no contaba con el servicio de agua potable para ese año. De igual manera, el 26.3% de la población aimara hablante tampoco disponía de este servicio. Asimismo, se registró que un 47.3% de la población que tiene como lengua materna una lengua indígena de la Amazonía no contaba con este servicio. El porcentaje de esta última población fue el más alto en relación con los otros grupos, diferenciándose ampliamente de la población que habla el castellano, en la cual solo un 11% de población que no disponía de dicho servicio.

Asimismo, de acuerdo a la Política Nacional del Pueblo Afroperuano, éste pueblo es un grupo vulnerable, y de especial protección de derechos. En relación a la información de viviendas afroperuanas por área de residencia, se especifica dentro de sus causas, que en contextos urbanos el 22.3% esta población tiene alguna privación severa o moderada de acceso a agua, mientras que esta situación se agrava considerablemente en ámbitos rurales (70.2%), situación que podría derivar en otras dificultades como el estado de salud de las personas afroperuanas.

Del mismo modo, la ENAHO 2018 reveló que las viviendas afroperuanas afrontan brechas de acceso a servicios sanitarios, puesto que el 26,2% no cuenta con acceso a un sistema de alcantarillado, en tanto que la cifra es de 16.5% en viviendas de familias no afroperuanas.

Al respecto, tanto la limitada disponibilidad de recursos, como la gran cantidad de necesidades insatisfechas y crecientes exigencias vinculadas con el acceso universal al agua potable hacen que en los hechos este derecho sea susceptible de una concreción progresiva; por ello, es que la Ley está priorizando a la población que se encuentre en condición de pobreza o vulnerabilidad, de conformidad con lo señalado en los párrafos precedentes."

Sobre el artículo 2 de la Ley

Artículo 2. Ámbito de aplicación

2.1 La presente Ley es de alcance para la población sin acceso al agua potable en los ámbitos urbano y rural a nivel nacional, prioritariamente, que se encuentre en condición de pobreza o vulnerabilidad.

2.2. Asimismo, es de aplicación para las siguientes entidades:

a) El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y sus programas.
b) El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS.

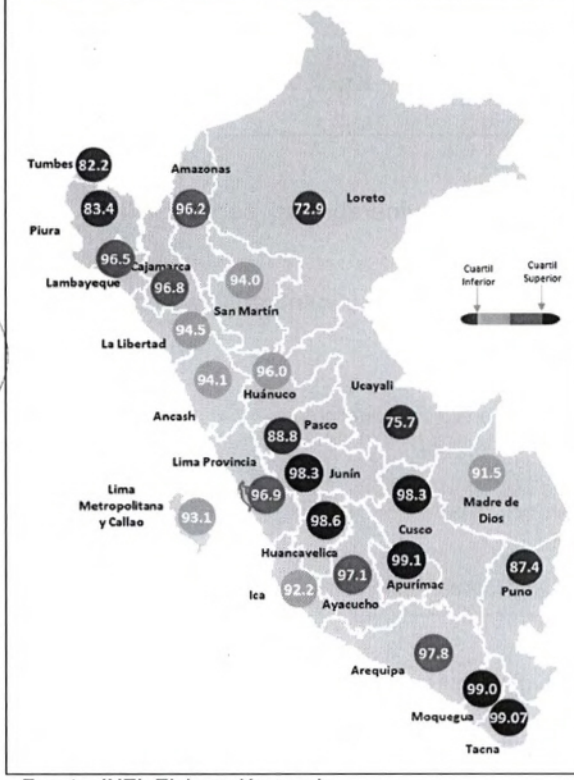
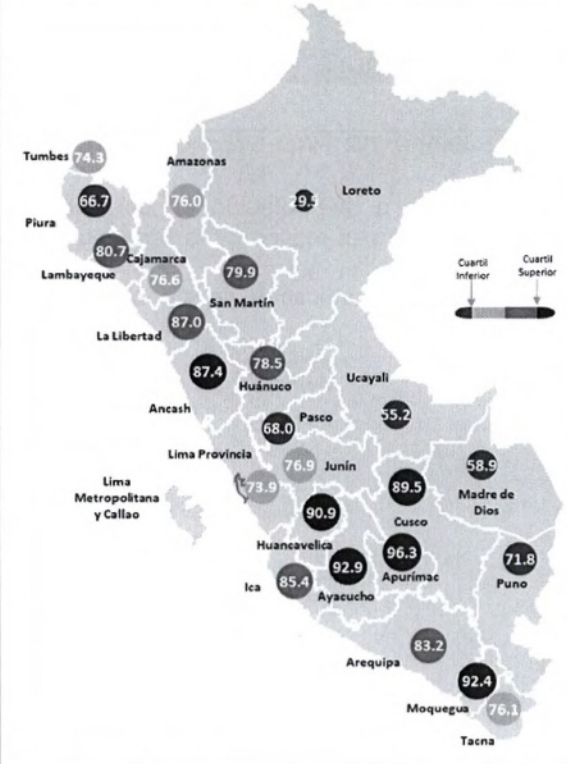
c) *Los Gobiernos Regionales.*
d) *Los Gobiernos Locales.*
e) *Autoridades de salud.*
f) *Los prestadores de los servicios de saneamiento.*

En lo referente al ámbito de aplicación, la Ley será aplicable a la población del ámbito urbano y rural que no cuentan con el servicio de agua potable, prioritariamente, que se encuentre en condición de pobreza o vulnerabilidad.

En lo referente a la cobertura de agua potable a nivel nacional al año 2022 fue de 89.9%, en dicho año la población sin acceso a este servicio (10.1%) fue de aproximadamente 3.4 millones de personas, encontrándose el 7.2% en el ámbito urbano y 22.0% en el ámbito rural.

Los siguientes gráficos muestran la cobertura de agua potable por departamento, incluido Lima Metropolitana. Se puede observar en el ámbito urbano que el departamento de Loreto es el que cuenta con la cobertura más baja y el departamento de Tacna presenta la más alta con 72.9% y 99.1% respectivamente, respecto a la cobertura de agua potable. Asimismo, en el ámbito rural el departamento de Loreto mantiene el valor más bajo y el departamento de Apurímac presenta el más alto con el 29.5% y 96.3% respectivamente, con respecto al mismo servicio.

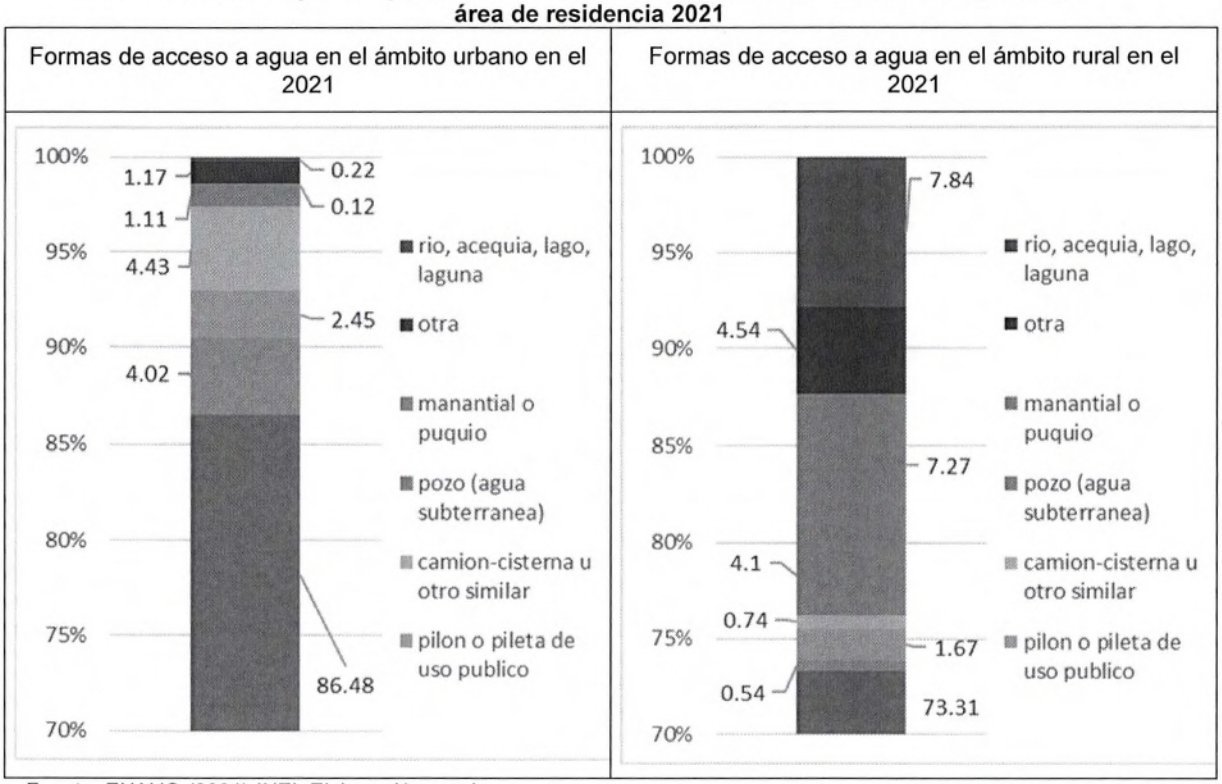
Gráfico 1: Cobertura de agua potable a nivel nacional por ámbito

Cobertura de agua potable en el ámbito urbano al 2022	Cobertura de agua potable en el ámbito rural al 2022
	

Fuente: INEI. Elaboración propia.

En cuanto a las otras formas de abastecimiento, que no se consideran cobertura o acceso a los servicios, una de las más comunes es mediante camión cisterna que alcanza al 3.7% de la población total, y 4.4% en el ámbito urbano. En el área rural el 7.3% se abastece del manantial o puquio y el 7.8% por río, acequia o forma similar.

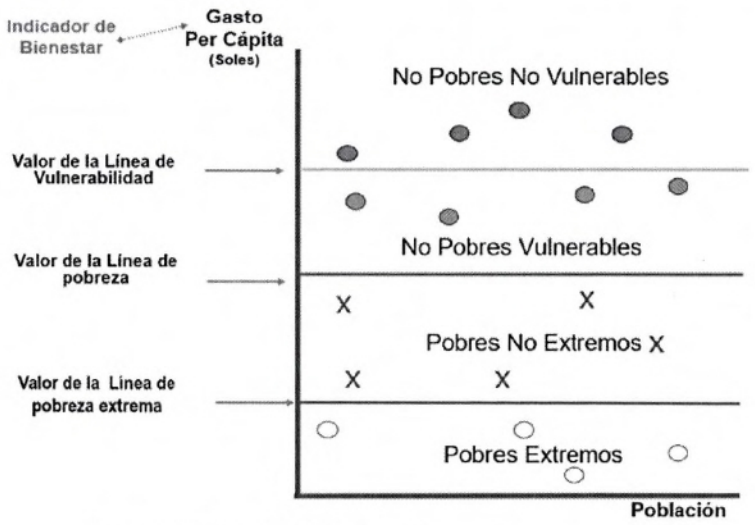
Gráfico 2: Porcentaje de la población con otras formas de abastecimiento de agua, según área de residencia 2021



Fuente: ENAHO (2021)-INEI. Elaboración propia

Respecto a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad según el INEI la clasificación se realiza de la siguiente forma:

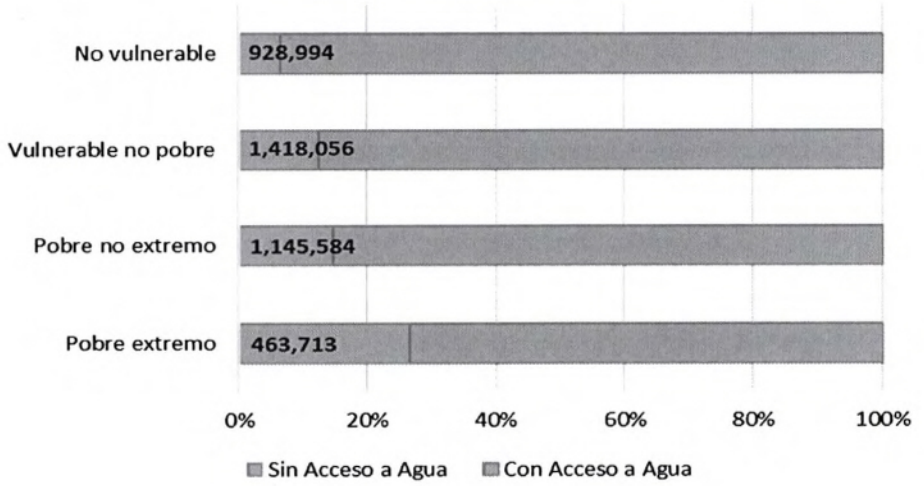
Gráfico 3: Clasificación de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad monetaria



Fuente: INEI (2022). Elaboración: INEI (2022).

Asimismo, de la población total identificada en el año 2022, aproximadamente 3 millones de personas que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad no cuentan con acceso a agua potable, conforme a lo siguiente:

Gráfico 4: Condición de pobreza y vulnerabilidad vs Acceso al Agua en el Hogar



Fuente: ENAHO (2022)-INEI. Elaboración propia

Ahora bien, las entidades públicas que permitirán la implementación de la norma son las siguientes:

- **El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)**
  El MVCS es el Ente rector del sector saneamiento y como tal, le corresponde planificar, diseñar, normar y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales en materia de saneamiento, las que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de descentralización y en todo el territorio nacional. Sumado a ello, participan de la implementación de la presente Ley, en el marco de sus competencias, los programas del MVCS, como son el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Programa Agua Segura para Lima y Callao; así como, el OTASS, en el marco de sus competencias.

- **El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS)**
  El OTASS, como organismo público técnico especializado adscrito al MVCS, actualmente cuenta con la competencia de fortalecer a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento **(EPS)** a nivel nacional; lo cual ha implicado obtener un vasto conocimiento en el gerenciamiento de la prestación de los servicios de saneamiento, adquisición de equipamiento, trasferencia de recursos a las EPS, entre otros.

- **Los Gobiernos Regionales (GR)**
  Los GR conforme a sus competencias y funciones contenidas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, son competentes -entre otros- para cofinanciar la ejecución de las intervenciones para la dotación del agua potable.

- **Los Gobiernos Locales (GL)**
  En las localidades en las que no se pueda intervenir a través de las EPS, las municipalidades competentes (distritales y provinciales) serán los vehículos encargados de dotar de agua potable a los beneficiarios.

- **Autoridades de salud**
  El artículo 9 del Reglamento de la Calidad del agua para consumo humano, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 031-2010-SA (Reglamento de Calidad), establece que la Autoridad de Salud del nivel nacional para la gestión de la calidad del agua para consumo humano, es el Ministerio de Salud **(MINSA)**, y la ejerce a través de la Dirección General de Salud Ambiental **(DIGESA)**; en tanto, que la

autoridad a nivel regional son las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) o Gerencias Regionales de Salud **(GRS)** o la que haga sus veces en el ámbito regional, y las Direcciones de Salud **(DISA)** en el caso de Lima, según corresponda.

Entre las competencias de la Autoridad de Salud se encuentran las siguientes: i) normar la vigilancia sanitaria del agua para consumo humano; y, ii) consolidar y publicar la información de la vigilancia sanitaria del agua para consumo humano en el país.

Correspondiendo a la DIRESA, GRS o DISA elaborar y aprobar los planes operativos anuales de las actividades del programa de vigilancia de la calidad del agua en el ámbito de su competencia y en el marco de la política nacional de Salud establecida por el MINSA - DIGESA.

- **Los prestadores de los servicios de saneamiento**
En el ámbito urbano, uno de los vehículos para dotar de agua potable a los beneficiarios es la empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado público (EPS), quienes estarán en la obligación de cumplir con la presente norma. Cabe indicar que, existen 49 (cincuenta) EPS y 1 prestador temporal y excepcional[10] que atienden el ámbito urbano en las veinticuatro (24) regiones de nuestro país.

Por otro lado, los prestadores indirectos (Operadores Especializados y Organizaciones Comunales) también se encuentran dentro del objeto de la presente norma; sin embargo, no están obligados a dotar de agua potable en el marco de la presente norma; sino que, la municipalidad competente (provincial o distrital) podrán coordinar con estos prestadores a fin obtener información de los beneficiarios, la infraestructura de los servicios de saneamiento, entre otra información. En algunos casos, la municipalidad competente podrá suscribir convenios de cooperación con estos prestadores indirectos a fin de poder dotar de agua potable a los beneficiarios.

En ese sentido, el MVCS impulsa el aseguramiento del acceso universal al agua potable para lo cual utilizará el Fondo de Inversión Agua Segura - FIAS, a fin de financiar las intervenciones que se realicen para la finalidad de esta norma; lo que se desarrollará más adelante.

Sobre el artículo 3 de la Ley

"Artículo 3. De las intervenciones

3.1 Las intervenciones a realizar para el acceso universal al agua potable comprenden infraestructura, equipamiento e insumos implementados mediante opciones tecnológicas convencionales y no convencionales que buscan asegurar la dotación de agua potable, incluyendo la operación y mantenimiento. Estas intervenciones son de carácter temporal y se mantienen hasta la prestación de los servicios de saneamiento, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley.

3.2 La ejecución de las intervenciones para el acceso universal al agua potable se realizan en los ámbitos geográficos que no constituyan zonas de riesgo no mitigable declaradas por la autoridad competente, asi como considerando la pertinencia cultural y la oferta hídrica disponible, de conformidad con lo previsto en el reglamento de la presente ley; en el cual se pueden establecer condiciones adicionales para tal efecto.

3.3. La ejecución de las intervenciones se realiza prioritariamente en bienes de dominio del Estado. Excepcionalmente, de mutuo acuerdo y previa suscripción de convenio, se pueden ejecutar intervenciones en bienes de dominio privado de terceros. El presente párrafo se implementa considerando lo establecido en las normas aplicables para la disposición de bienes inmuebles.

[10] En estricto, existen cuarenta y nueve (49) empresas prestadoras de servicios de saneamiento y un (1) prestador temporal y excepcional, conforme al detalle siguiente:
- Una (1) empresa prestadora de servicios de saneamiento pública de accionariado estatal: Sedapal;
- Cuarenta y ocho (48) empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal (empresas prestadoras municipales); y.
- Un (1) prestador temporal y excepcional: Agua Tumbes (Unidad Ejecutora), administrado por el OTASS.

3.4. El costo de las intervenciones es financiado total o parcialmente por el Estado. En caso los beneficiarios no se encuentren en condición de pobreza o vulnerabilidad, el costo de las intervenciones puede ser asumido por estos. El reglamento de la presente ley desarrolla lo dispuesto en el presente párrafo.

3.5. La responsabilidad de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y de los gobiernos locales competentes por la intervención, alcanza hasta la entrega al beneficiario del agua potable y/o del equipamiento necesario; así como, mantener en condiciones óptimas la infraestructura y/o equipamiento instalado.

3.6 Los activos resultantes de las intervenciones son de titularidad de las EPS y/o de los gobiernos locales competentes.

3.7 La articulación entre entidades e intervenciones a realizar se desarrolla en el Reglamento de la presente Ley, el Plan Nacional de Saneamiento y los Planes Regionales de Saneamiento.

3.8 Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y los gobiernos locales se encuentran facultados para suscribir convenios de colaboración interinstitucional con el OTASS y los Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la ejecución de intervenciones hasta la entrega del activo, de conformidad con el Reglamento de la presente Ley.

3.9 Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, se establece en el reglamento de la presente Ley, la definición y alcance de las intervenciones; identificación de la población objetivo; definición del criterio de temporalidad, responsabilidades en la ejecución de las intervenciones; procesos de coordinación con los Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la programación, identificación de temporalidad y el reporte de ejecución de las intervenciones; y el esquema de seguimiento de la implementación y contribución al logro de resultados del sector saneamiento.

De acuerdo al párrafo 3.1 del artículo 3 de la presente Ley, se contempla la ejecución de intervenciones, para garantizar el acceso universal al agua potable, que comprenden las infraestructuras, equipamientos e insumos implementados mediante opciones tecnológicas convencionales y no convencionales, incluyendo la operación y mantenimiento. Cabe indicar que, estas intervenciones pueden ser, entre otras, las siguientes:

1. **Piletas públicas**
   Conexión de agua potable empalmada a la red de distribución con medidor de consumo, que permite el abastecimiento del agua potable, mediante un pilón.

2. **Reparto de agua mediante camiones cisternas**
   Vehículo motorizado autorizado con tanque cisterna, que transportara agua para consumo humano desde el punto más cercano del surtidor hasta el beneficiario, en condiciones especiales, donde no exista red cercana.

3. **Tanques de agua**
   Sistema no convencional de almacenamiento de agua potable mediante tanque de agua cuya capacidad está de acuerdo a la demanda poblacional, ubicado en donde no exista red cercana.

4. **Plantas compactas para tratamiento de agua potable**
   Son instalaciones que permiten realizar el tratamiento de aguas cruda de la fuente. Estas plantas son modulares y pueden ir contenerizadas o no, dependiendo de las características de la fuente y el entorno.

5. **Filtro de agua potable casero**
   Aparato o dispositivo que permite purificar el agua cruda que viene directamente de la captación o llega a través de grifos.

Las intervenciones antes mencionadas se ejecutan bajo el marco normativo técnico vigente y considerando la ubicación de la localidad a atender en función a la cercanía y condiciones técnicas disponibles.

Del mismo modo, se establece que las intervenciones se mantienen hasta la prestación de los servicios de saneamiento. Cabe indicar que, la prestación de dichos servicios se

encuentra conformados por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Tratamiento de Aguas Residuales y Disposición Sanitarias de Excretas, de conformidad con lo regulado en el artículo 2 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1280.

En ese sentido, se evidencia que las intervenciones son de carácter alternativo y temporal, ya que en caso se implementen en una localidad determinada, solo se mantendrán hasta cuando se presten los servicios de saneamiento, siendo parte de ellos el servicio de agua potable. Ocurrido dicho escenario, concluirá el acceso de agua potable a través de las intervenciones.

De otro lado, el párrafo 3.2 del artículo 3 de la presente Ley, señala que las intervenciones se ejecutan en localidades que no constituyan zonas de riesgo no mitigable declaradas por la autoridad competente, considerando la oferta hídrica disponible, de conformidad con lo que establezca el reglamento de la Ley.

Al respecto, en lo referente a la condición en localidades que no constituyan zonas de riesgo no mitigable declaradas por la autoridad competente, debemos indicar que dicha condición es concordante con las disposiciones previstas en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y aquellas correspondientes a la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 012-2022-VIVIENDA.

Así, de acuerdo con el párrafo 95.1 del artículo 95 del Reglamento de la Ley N° 31313, las zonas de riesgo no mitigable, son aquellas zonas donde existe la probabilidad de que la población o sus medios de vida sufran daños o pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro y que la implementación de medidas de mitigación resulta de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la reubicación de las viviendas y equipamiento urbano respectivo. Comprende las zonas de muy alto riesgo y de riesgo recurrente por deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos, entre otros peligros. Asimismo, el párrafo 95.2 de dicho artículo señala que las municipalidades provinciales declaran las zonas de riesgo no mitigable mediante Acuerdo de Concejo Provincial.

Es preciso enfatizar que, los efectos de la declaración de zonas de riesgos no mitigable antes citada, implica la prohibición, entre otros, de la instalación de servicios públicos esenciales, conforme a lo dispuesto en el párrafo 93.1 del artículo 93 de la Ley N° 31313, el cual señala que, "*La declaratoria impide la realización de proyectos de habilitación urbana o proyectos edificatorios, la instalación de servicios públicos esenciales en dichas zonas y la formalización de ocupaciones informales si las hubiese*".

Del mismo modo, el artículo 21 de Ley N° 29869, Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, además de señalar la prohibición de la ocupación de zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable para fines de vivienda o cualquier otro que ponga en riesgo la vida o integridad de las personas, dispone que *"(...) no se puede dotar de servicios públicos a los asentamientos poblacionales que ocupen zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable, bajo responsabilidad*".

En ese sentido, considerando el alineamiento de las intervenciones de acceso universal al agua potable a las normas del SINAGERD y a aquellas pertinentes al Desarrollo Urbano Sostenible, la presente Ley delimita su alcance a localidades que no constituyan zonas de riesgo no mitigable, que incluye aquellas de muy alto riesgo no mitigable, declaradas por el gobierno local correspondiente, ello a fin de no incentivar ocupaciones informales en dichas localidades.

Asimismo, con relación a la oferta hídrica, se debe señalar que en el ámbito urbano, de acuerdo a la información de la prestación de los servicios de cuarenta y nueve (49) EPS, los rangos evaluados más críticos se presentan en empresas pequeñas sometidas al Régimen de Apoyo Transitorio que solo alcanzan una continuidad promedio de 8.90 horas/día; por otro lado, el volumen de producción actual de agua potable es 16,342.72 l/s y está por debajo de la capacidad de diseño de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) que asciende a 20,282.43 l/s, conforme a lo indicado por el OTASS; en consecuencia, se deberá realizar una optimización y/o mejoramiento a dichas plantas, o buscar nuevas fuentes, a fin de lograr una mayor dotación de agua potable que permita

implementar medidas alternativas para el abastecimiento de agua potable para la población.

Por otro lado, el párrafo 3.3 del artículo 3 de la presente Ley, establece que la instalación de las intervenciones se realiza prioritariamente en áreas de dominio del Estado. Excepcionalmente, de mutuo acuerdo y previa suscripción de convenio, se puede realizar intervenciones en áreas de dominio privado de terceros.

Al respecto, dicho párrafo propone un orden de priorización en cuanto al lugar donde se instalarán las intervenciones de las localidades escogidas para brindar el acceso universal al agua potable. En atención a ello, se establece el orden de priorización siguiente:

1. Intervenciones en áreas de dominio del Estado, pudiendo ser estas de dominio público (parques, plazas, veredas, entre otros) y de dominio privado del Estado (locales y predios de alguna entidad del Estado).

   Asimismo, debe tenerse en cuenta que la normativa aplicable para intervenir en dichas áreas son principalmente el Código Civil y la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, a través de la afectación en uso, cesión en uso, usufructo, arrendamiento, comodato, servidumbre, y otros actos regulados en dichas normas, entre otros.

2. Intervenciones en áreas de dominio privado: Estas áreas se caracterizan por tener una titularidad privada, sea como persona natural o jurídica. Para realizar intervenciones en dichas áreas se debe aplicar principalmente la normativa del Código Civil.

   Entre las figuras jurídicas a utilizar para la ejecución de intervenciones en dichas áreas se encuentra el arrendamiento, la compra venta, la cesión en uso, el derecho de superficie, entre otros.

Por su parte, el párrafo 3.4 del artículo 3 de la presente Ley regula que el costo de las intervenciones es financiado total o parcialmente por el Estado. Así, se deja en claro la existencia de dos (2) supuestos a tener en consideración:

a. Financiamiento total de las intervenciones por el Estado: En estos casos el Estado puede financiar las intervenciones con recursos provenientes del FIAS de modo total o parcial (cofinanciamiento). En el caso que el financiamiento sea parcial, el cofinanciamiento restante pueda ser realizado por otra entidad pública, como el gobierno local o gobierno regional.

b. Financiamiento parcial de las intervenciones por el Estado: En este supuesto, el Estado cofinancia la intervención con recursos del FIAS o con parte de dicho fondo y con recursos de otra entidad pública; asimismo, la otra parte del cofinanciamiento lo realizar un agente privado (ONG, cooperación internacional, los beneficiarios de la intervención, entre otros) que tiene interés en la realización de determinada ejecución.

Adicionalmente, el párrafo 3.4 también regula el caso en que los beneficiarios que no se encuentren en condición de pobreza o vulnerabilidad, el costo de las intervenciones puede ser asumido por dichos beneficiarios.

Cabe indicar que, si bien la ley se orienta a priorizar a la población que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad, en el marco del acceso universal no se cierra la posibilidad del acceso al agua potable a la población que no se encuentre en dicha condición; no obstante, se establece un tratamiento diferenciado a fin que, en función a su mayor capacidad adquisitiva, puedan asumir el costo de las intervenciones a realizar en su localidad.

Por otro lado, conforme a lo señalado en el párrafo 3.5 del artículo 3 de la Ley resulta necesario que se delimite la responsabilidad de las EPS y de las municipalidades competentes por la intervención a realizar; toda vez que, como se mencionó líneas arriba, no se está prestando el servicio de agua potable, siendo esto último el objeto de los prestadores de servicios de saneamiento, de acuerdo a la Ley Marco y su Reglamento.

En ese sentido, resulta necesario delimitar la responsabilidad de las EPS y de las municipalidades competentes a estos tres (3) supuestos:

a) La entrega al beneficiario del agua potable en condiciones de calidad;
b) La entrega del equipamiento necesario; y,
c) Mantener en condiciones óptimas de la infraestructura y/o equipamiento instalado.

Como se puede evidenciar, las EPS y las municipalidades, quienes actúan como "vehículos", deberán tener énfasis en la calidad del agua potable que se le entrega al beneficiario, a poner en disposición de ellos el equipamiento necesario para la dotación del agua potable y de mantener en condiciones óptimas la infraestructura y/o el equipamiento instalado.

De lo expuesto hasta aquí, se puede señalar que los vehículos no serán responsables por mantener potabilizado el agua por determinado tiempo, pues ello dependerá que los beneficiarios cumplan con el cuidado que se establezca para cada caso.

Finalmente, el párrafo 3.6 del artículo 3 de la presente Ley prescribe que los activos resultantes de las intervenciones son de titularidad de las EPS y/o de las municipalidades competentes. Al respecto, dicho párrafo es consecuencia de la responsabilidad que asumen las EPS y/o las municipalidades por la intervención a realizar, conforme a lo establecido en el párrafo 3.5 del citado artículo.

De otro lado, con el párrafo 3.9 del artículo 3 de la presente Ley, precisa que con el reglamento se establece, entre otros, la definición y alcance de las intervenciones; identificación de la población objetivo; definición del criterio de temporalidad, responsabilidades en la ejecución de las intervenciones; procesos de coordinación con los Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la programación, identificación de temporalidad y el reporte de ejecución de las intervenciones; y el esquema de seguimiento de la implementación y contribución al logro de resultados del sector saneamiento.

Sobre el artículo 4 de la Ley

> *"**Artículo 4. Calidad del agua potable***
>
> *4.1 Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, la calidad del agua debe cumplir con la normativa sobre calidad del agua para consumo humano emitida por la autoridad nacional de salud.*
> *4.2 La autoridad de salud competente se encarga de la vigilancia y fiscalización de lo establecido en el párrafo precedente, ejerciendo su función sancionadora en los casos que corresponda.*
> *4.3 Los gobiernos locales competentes deben informar a la autoridad de salud local la sectorización de la distribución del agua en su territorio."*

Respecto del artículo 4 de la presente ley, resulta necesario sustentarlo en función a los dos (2) siguientes tópicos:

a) Sobre la Vigilancia Sanitaria de agua de consumo humano

Al respecto, el artículo 13 del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2010-SA, establece que la vigilancia sanitaria del agua para consumo humano es una atribución de la Autoridad de Salud, que se define y rige como la sistematización de un conjunto de actividades realizadas por la Autoridad de Salud, para identificar y evaluar factores de riesgo que se presentan en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, desde la captación hasta

la entrega del producto al consumidor, con la finalidad de proteger la salud de los consumidores, en cumplimiento del citado reglamento.

b) Sobre la vigilancia del agua por parte de la autoridad de salud en los diferentes ámbitos

Al respecto, de acuerdo al artículo 14 del Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2010-SA, la DIGESA y las Direcciones de Salud o las DIRESA o las GRS en todo el país, administran el programa de vigilancia sanitaria del abastecimiento del agua, concordante a sus competencias y con arreglo al Reglamento de Calidad. Las acciones del programa de vigilancia se organizan de acuerdo a un conjunto de criterios, siendo uno de ellos el referido al "Ámbito", el cual consiste en la definición de las zonas de la actividad básica del programa de vigilancia, distinguiendo el ámbito de residencia: urbano, periurbano y rural, a fin de determinar la zona de trabajo en áreas geográficas homogéneas en cuanto a tipo de suministro, fuente y administración del sistema de abastecimiento del agua.

En atención a ello, el citado Reglamento de Calidad, entre otros, establece las funciones de las entidades competentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley.

Sobre el artículo 5 de la Ley

> ***"Artículo 5. Reconocimiento de organización de beneficiarios***
>
> *5.1 Los beneficiarios que se organicen para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, adquieren personería jurídica de derecho privado desde su reconocimiento por parte de los gobiernos locales competentes, no siendo exigible su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.*
>
> *5.2 Previo a la intervención a ejecutar, la organización de beneficiarios suscribe, con la EPS o gobierno local competente, los respectivos convenios para el acceso al agua potable. El reglamento de la presente Ley regula los derechos y obligaciones de la organización de beneficiarios, así como su organización y funcionamiento."*

El párrafo 5.1 del artículo 5 de la presente Ley establece que los beneficiarios que se organicen adquieren personería jurídica de derecho privado; asimismo, no es requisito su inscripción en el registro de personas jurídicas a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, siendo solo necesario su reconocimiento por las municipalidades competentes, esto es, en la municipalidad donde se ubique la localidad de la organización beneficiaria.

Con lo dispuesto en dicho párrafo se busca que los responsables de las intervenciones tengan una contraparte plenamente identificada con personería jurídica, a fin de otorgarle derechos y obligaciones para un adecuado cuidado, resguardo y operación de las intervenciones instaladas en sus respectivas localidades, para el acceso al agua potable a través de las intervenciones a realizar.

Cabe señalar, que conforme a lo establecido en el párrafo 5.2 del mencionado artículo, antes de realizar cualquier intervención, la organización de beneficiarios debe suscribir con la EPS o las municipalidades competentes, en su calidad de responsables de las intervenciones, los respectivos convenios donde se estipulen claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. Asimismo, el reglamento de la Ley establecerá las condiciones mínimas a considerar en los convenios para el acceso al agua potable.

Sobre el artículo 6 de la Ley

> ***"Artículo 6. Intervención en el ámbito urbano***

6.1 En el ámbito urbano la ejecución de las intervenciones para asegurar el acceso universal al agua potable es de responsabilidad de las EPS dentro de su ámbito de responsabilidad, y de los gobiernos locales competentes en su respectiva jurisdicción, en colaboración con los prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito urbano.
6.2 Las intervenciones a realizarse en el ámbito urbano se orientan a asegurar una dotación mínima expresada en litros por persona por día (lpd), conforme a lo establecido en el reglamento de la presente Ley."

El párrafo 6.1 del artículo 6 de la Ley establece que, en el ámbito urbano, la ejecución de las intervenciones es de responsabilidad de las EPS y de las municipalidades competentes.

Al respecto, dicha responsabilidad implica que las EPS y las municipalidades competentes ostenten la titularidad de los activos generados por las intervenciones, conforme a lo señalado en el párrafo 3.6 del artículo 3 de la Ley; así como, que se les transfiera recursos, a través del FIAS, para la ejecución de las intervenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1284. Asimismo, el rol de responsable de las EPS y las municipalidades implica que puede tener derechos y obligaciones asociadas con la implementación de las intervenciones, lo cual podrá ser regulado en el reglamento de la Ley.

De otro lado, el párrafo 6.2 del artículo 6 de la Ley establece la dotación mínima de litros de agua en el ámbito urbano, lo cual será establecido en el reglamento de la presente Ley. Al respecto, es preciso indicar que existen diversos estudios que considerar una dotación mínima de agua potable. Uno de ellos es el de la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization -WHO, en inglés) que considera una dotación de 20 a 50 Lpd[11], teniendo en cuenta que el uso solo será para consumo humano y dependiendo de la disponibilidad hídrica, no generándose contribución de agua residual doméstica ya que la vivienda de la población beneficiaria no cuenta con un sistema de descarga.

Tabla 3: Dotación de agua potable para el acceso universal

Access level and typical volumes of water used in the home[a]	Accessibility of water supply	Adequacy for health needs	Level of health concern[b]
Inadequate access (quantity collected can be below 5.3 L/person/day)	More than 1000 m in distance or 30 minutes total collection time	Drinking – cannot be assured Cooking – cannot be assured Hygiene – cannot be assured at the home,[c] com[illegible]ne, hand[illegible] washing; other hygiene activities have to be undertaken away from the home	Very high
Basic access[d] (average quantity unlikely to exceed 20 L/person/day)	100–1000 m in distance or 5–30 minutes total collection time	Drinking – should be assured Cooking – should be assured Hygiene – food hygiene, handwashing and face washing may be assured; bathing and laundry cannot be assured at the home but may be carried out at water source	High
Intermediate access (average quantity about 50 L/ person/day)	Water delivered through one tap on- plot, or within 100 m or 5 minutes total collection time	Drinking – assured Cooking – assured Hygiene – all food hygiene, handwashing and face washing assured under non-outbreak conditions; enhanced hygiene during infectious disease outbreaks not assured; bathing and laundry at the home should also be assured	Medium
Optimal access (average quantity more than 100 L/ [illegible]son/day[e])	Water supplied through multiple taps and continuously available	Drinking – all needs met Cooking – all needs should be met Hygiene – all food hygiene, handwashing and face washing needs should be met, including for bathing and laundry at the home, and household cleaning	Low

Fuente: WHO (2020)

Sobre el artículo 7 de la Ley

"Artículo 7. Retribución en el ámbito urbano

[11] Table S1. Summary of water access, adequacy and level of health concern de Domestic water quantity, service level and health .

7.1 La retribución por la dotación de agua potable es equivalente a la tarifa establecida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) para cada prestador de servicios de saneamiento en el ámbito urbano. Dicha retribución puede ser asumida total o parcialmente por el beneficiario.

7.2 El reglamento de la presente Ley establece la forma de retribución en el ámbito urbano, incluyendo las excepciones que correspondan."

El artículo 7 de la presente Ley prescribe que la retribución por la dotación de agua potable es equivalente a la tarifa establecida por la Sunass para cada prestador de servicios de saneamiento en el ámbito urbano.

Al respecto, con el citado párrafo se introduce el concepto de "retribución", el cual debe ser entendido como la contraprestación que podrían asumir total o parcialmente los beneficiarios del acceso universal al agua potable en el ámbito urbano, por la dotación de agua potable entregada. Asimismo, la forma y el valor de la retribución, incluyendo las excepciones que correspondan, se definirán en el reglamento de la presente ley.

Como se indicó anteriormente, los beneficiarios de la presente norma son aquellas personas que no cuentan con acceso al servicio de agua potable y que, prioritariamente, se encuentran en la condición de pobreza o vulnerabilidad. En este marco, el beneficiario tendrá derecho a que los vehículos (prestadores de servicio) les doten de agua potable en los volúmenes establecidos en el reglamento, así como en:

a) Que se le entregue el agua potable en condiciones de calidad;
b) Que se le entregue el equipamiento necesario para la dotación del agua potable; y,
c) Que se mantengan en condiciones óptimas de la infraestructura y/o equipamiento instalado para la dotación del agua potable.

Sobre el artículo 8 de la Ley

"Artículo 8. Intervención en el ámbito rural

8.1 En el ámbito rural, la ejecución de las intervenciones para asegurar el acceso universal al agua potable es de responsabilidad de los gobiernos locales competentes, en su respectiva jurisdicción, en colaboración con los prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural.

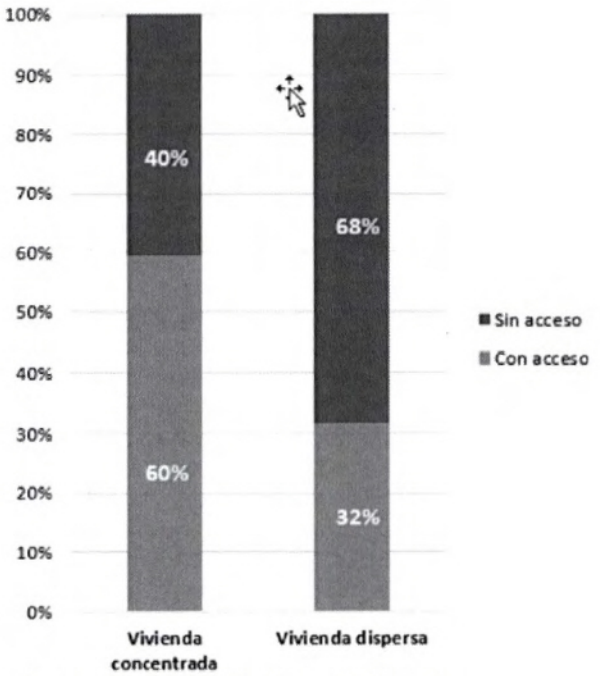
8.2 Las intervenciones a realizarse en el ámbito rural se orientan a asegurar una dotación mínima expresada en litros por persona por día (lpd), conforme a lo establecido en el reglamento de la presente Ley."

La dotación prevista para atender a población concentrada del ámbito rural, cuyo alcance técnico es mediante red pública de piletas, será de 30 Lpd[12]; entendiéndose como población concentrada a aquella en la que las viviendas se encuentran ubicadas en centros poblados agrupadas a más del 40% pudiendo llegar hasta el 100%. Por otro lado, se debe revisar -para el reglamento- la dotación mínima para la población dispersa del ámbito rural.

Según la información del MVCS (Fuente DATASS, 2022), existen 2,322,354 vivienda rurales de las cuales el 41% representan a centros poblados concentrados. Asimismo, respecto del análisis de los centros poblados (concentrados y dispersos) y su acceso a agua, se observa que, en los centros poblados dispersos cerca del 68% de sus viviendas no tiene acceso; mientras que, en los concentrados es el 40%, existiendo mayor brecha en el primero. Se tiene la siguiente distribución respecto a los ámbitos concentrados y dispersos:

[12] Resolución Ministerial N° 192-2018/VIVIENDA, Capítulo III, 1.1.c.

Gráfico 5: Distribución de población – ámbitos concentrados y dispersos



El acceso es medido sobre viviendas rurales: red publica + pilón
Fuente: INEI, 2017 (CPV)

Sobre el artículo 9 de la Ley

> ***Artículo 9. Retribución en el ámbito rural***
>
> *9.1 La retribución por la dotación de agua potable es determinada por el gobierno local competente. Dicha retribución puede ser asumida total o parcialmente por el beneficiario.*
>
> *9.2 El reglamento de la presente Ley establece la forma de retribución en el ámbito rural, incluyendo las excepciones que correspondan.*

El artículo 9 de la presente Ley prescribe que la retribución por la dotación de agua potable en el ámbito rural es determinada por la municipalidad competente.

Al respecto, similar al ámbito urbano, como se indicó líneas arriba, la retribución es la contraprestación que podrían asumir total o parcialmente los beneficiarios del acceso al agua potable en el ámbito rural por la dotación de agua potable entregada; la cual debe cubrir los costos de producción de agua potable.

Sobre la metodología para calcular los costos de producción de agua potable, incluyendo sus excepciones, esta deberá estar incluida en el Reglamento de la presente Ley, a fin de que los gobiernos locales puedan calcular la retribución correspondiente.

Sobre el artículo 10 de la Ley

> ***Artículo 10. Implementación y financiamiento***
>
> *La implementación de las intervenciones en el marco de lo dispuesto en la presente Ley, así como su financiamiento total o parcial, se realiza a través del Fondo de Inversión Agua Segura – FIAS, cuya creación se dispuso mediante el Decreto Legislativo N° 1284.*

El artículo 10 de la presente Ley establece que la implementación y el financiamiento total o parcial de las intervenciones a realizar en el marco de lo dispuesto en la citada Ley, se realiza a través del FIAS.

Sobre el particular, es preciso señalar que este artículo dispone que todas las intervenciones que se realicen en el marco de la presente Ley para la dotación de agua potable debe realizarse a través del FIAS.

Lo anteriormente indicado se ha establecido debido a que a través del FIAS se revisarán si las alternativas convencionales o no convencionales que se propongan, para determinada localidad, corresponde a los presupuestos para el acceso universal; así mismo, el FIAS debe revisar si las condiciones de la localidad y de la población califican dentro del objeto de la presente Ley.

Por otro lado, si bien el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1284, establece que el FIAS es creado con la finalidad de financiar programas, proyectos y/o actividades orientados a cerrar brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional; es preciso indicar que, la Única Disposición Complementaria Modificatoria de la presente Ley propone ampliar dicha finalidad para que el FIAS financie total o parcialmente intervenciones que aseguren el acceso universal al agua potable, prioritariamente, para la población que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad. Asimismo, dicha disposición establece otras medidas que proponen modificar el funcionamiento del FIAS para dejar en claro, entre otros, que el financiamiento de dicho fondo está dirigido hacia a las EPS y Gobiernos Locales, lo cual es considerado como una subvención.

Adicionalmente, es preciso señalar que el Fondo de Inversión de Agua y Saneamiento creado mediante Decreto Legislativo 1284 (diciembre 2016) no ha recibido financiamiento alguno para el cumplimiento de su finalidad.

Finalmente, se deja en claro la posibilidad que, en algunos casos el financiamiento de la intervención a realizar a través del FIAS puede ser parcial (cofinanciamiento); esto es, que una parte del financiamiento podría efectuarse por el FIAS y otra parte, por los GR, los GL, el OTASS, entre otras entidades competentes; o por parte de entidades privadas.

Sobre la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley

> ***PRIMERA. Reglamentación***
>
> *El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprueba mediante Decreto Supremo el reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario, contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial El Peruano."*

Sobre el particular, la presente Ley establece un plazo para que el Ejecutivo, a través del MVCS apruebe el Reglamento. El plazo establecido obedece a la necesidad de dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, se aprobó el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad

Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.

Sobre la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley

> ***SEGUNDA- Beneficiarios de interés social***
>
> *Excepcionalmente, en adición a lo dispuesto en el numeral 2.1 del artículo 2 de la presente Ley, la presente es aplicable para las instituciones educativas, establecimientos de salud y viviendas de interés social que no cuenten con acceso al agua potable, sujeto a la disponibilidad presupuestaria del sector competente. El Reglamento de la presente Ley regula lo dispuesto en la presente disposición.*

Sobre los recursos necesarios para la implementación del Proyecto de Ley de Acceso Universal al Agua Potable

Al respecto, se debe indicar que la proyección de costos para realizar las intervenciones en los ámbitos urbano y rural, sin considerar la operación y mantenimiento, hasta el cuarto año, asciende a S/ 542 millones, aproximadamente. Dicho monto se sustenta conforme a lo siguiente:

Tabla 4: Proyección de costos de intervenciones sin operación y mantenimiento en los ámbitos urbano y rural (miles)

Programacion de Ejecucion Presupuestal	Costo de Intervenciones Ambito Urbano	Costo de Intervenciones Ambito Rural	Costo Total de Intervenciones (Urbano + Rural)
Año 1	62,327	80,924	**143,250**
Año 2	95,691	56,474	**152,165**
Año 3	80,331	63,406	**143,737**
Año 4	51,798	51,147	**102,945**
COSTO TOTAL	**S/. 290,147**	**S/. 251,951**	**S/. 542,098**

Nota: El costo de la infraestructura incluye el equipamiento e insumo.
Elaboración: PROPIA.

Asimismo, se proyecta que hasta el año 10, el costo de las intervenciones (que incluye la operación y mantenimiento) asciende hasta S/ 1 405 millones aproximadamente. Cabe indicar que, la operación y mantenimiento se proyecta para los próximos 10 años, mientras que la instalación de infraestructura, equipamiento e insumo, solo se proyecta para los cuatro (04) siguientes años; ello es así, en vista a que la proyección del logro de cobertura universal con servicios de saneamiento es hasta el año 2032, conforme al Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026.

Tabla 5: Costos totales de intervenciones (en miles)

Horizonte de O&M	Costo de O&M Urbano	Costo O&M Rural	Infraestructura	Total Intervenciones (Infraestructura + O&M)
Año 1	21,697	20,830	143,250	185,777
Año 2	55,009	35,366	152,165	242,540
Año 3	82,973	51,687	143,737	278,397
Año 4	101,005	64,852	102,945	268,802
Año 5	69,314	52,354	0	121,669
Año 6	45,996	44,022	0	90,019
Año 7	40,403	38,208	0	78,611
Año 8	34,810	32,393	0	67,204
Año 9	18,032	27,854	0	45,886
Año 10	0	26,222	0	26,222
COSTO TOTAL	**469,240**	**393,787**	**542,098**	**S/. 1,405,125**

Nota: El costo de la infraestructura incluye el equipamiento e insumo.
Elaboración: Propia.

Además se ha estimado los costos a nivel de regiones y por infraestructuras, también se ha a nivel urbano y rural como se muestra en las siguientes tablas.

Tabla 6: Costo estimado de intervenciones por departamentos en el ámbito urbano

Departamentos	Reservorios + Red de Piletas	Incremento de Capacidad Instalada (PTAP)	Operación y Mantenimiento	Total
Amazonas	1,204,798	138,931	2,809,700	4,153,429
Ancash	6,397,325	737,708	14,919,146	22,054,178
Apurímac	282,724	32,602	659,337	974,663
Arequipa	5,765,056	0	7,101,954	12,867,010
Ayacucho	2,381,270	274,596	5,553,339	8,209,205
Cajamarca	636,809	73,434	1,485,097	2,195,339
Cusco	3,053,306	352,092	7,120,588	10,525,986
Huancavelica	22,698	2,617	52,933	78,248
Huánuco	2,550,686	294,132	5,948,433	8,793,252
Ica	7,181,942	828,186	16,748,944	24,759,072
Junín	3,001,373	346,103	6,999,477	10,346,953
La Libertad	11,640,514	0	14,339,913	25,980,426

Lambayeque	8,368,038	964,960	19,515,027	28,848,025
Lima Metropolitana y Callao	113,877,692	0	140,285,576	254,163,268
Lima Provincias	3,657,975	0	4,506,248	8,164,223
Loreto	31,337,470	3,613,680	73,081,836	108,032,986
Madre de Dios	1,434,318	165,398	3,344,961	4,944,678
Moquegua	126,744	14,616	295,580	436,940
Pasco	3,956,859	456,285	9,227,757	13,640,902
Piura	25,055,449	0	30,865,730	55,921,179
Puno	20,761,755	2,394,142	48,418,304	71,574,200
San Martin	6,031,255	695,494	14,065,437	20,792,187
Tacna	579,792	66,859	1,352,128	1,998,779
Tumbes	4,196,730	483,946	9,787,156	14,467,832
Ucayali	13,187,958	1,520,769	30,755,520	45,464,247
Total	276,690,536.5	13,456,551	469,240,121	759,387,208

Elaboración: Propia.

Tabla 7: Costo estimado de intervenciones por regiones en el ámbito rural

Regiones	Reservorios + Red de Piletas	Incremento de Capacidad Instalada (PTAP)	Filtros Domiciliarios	Operación y Mantenimiento	Total
Amazonas	8,985,103	711,574	3,655,057	13,387,343	26,739,077
Ancash	5,405,997	304,328	1,563,204	5,725,532	12,999,061
Apurímac	1,782,039	204,291	1,049,359	3,843,476	6,879,165
Arequipa	1,369,419	278,729	1,431,714	5,243,927	8,323,789
Ayacucho	2,625,736	206,296	1,059,654	3,881,186	7,772,872
Cajamarca	15,028,510	2,926,013	15,029,703	55,049,152	88,033,377

Cusco	9,387,704	880,087	4,520,640	16,557,706	31,346,136
Huancavelica	5,460,664	458,470	2,354,967	8,625,515	16,899,615
Huanuco	9,027,849	2,139,163	10,987,983	40,245,584	62,400,578
Ica	1,458,205	99,132	509,202	1,865,049	3,931,588
Junin	8,067,798	1,700,475	8,734,628	31,992,241	50,495,142
La Libertad	4,360,679	637,175	3,272,903	11,987,632	20,258,389
Lambayeque	4,036,446	586,528	3,012,751	11,034,773	18,670,498
Lima Provincias	2,786,946	410,102	2,106,523	7,715,542	13,019,114
Loreto	11,706,789	3,095,325	15,899,390	58,234,549	88,936,054
Madre de Dios	960,923	178,902	918,946	3,365,814	5,424,585
Moquegua	432,948	71,726	368,426	1,349,431	2,222,531
Pasco	2,582,275	349,001	1,792,671	6,565,999	11,289,947
Piura	6,752,489	1,361,195	6,991,888	25,609,123	40,714,695
Puno	11,747,113	3,044,573	15,638,699	57,279,719	87,710,105
San Martin	5,520,058	603,965	3,102,317	11,362,827	20,589,167
Tacna	416,794	93,080	478,113	1,751,180	2,739,167
Tumbes	357,501	29,843	153,292	561,462	1,102,099
Ucayali	3,247,191	560,864	2,880,925	10,551,936	17,240,916
Total	123,507,175	20,930,838	107,512,955	393,786,699	645,737,667

Elaboración: Propia.

Sumado a ello, en la tabla 6 siguiente se establece la programación de costos por reparto con camiones cisternas, conforme a lo siguiente:

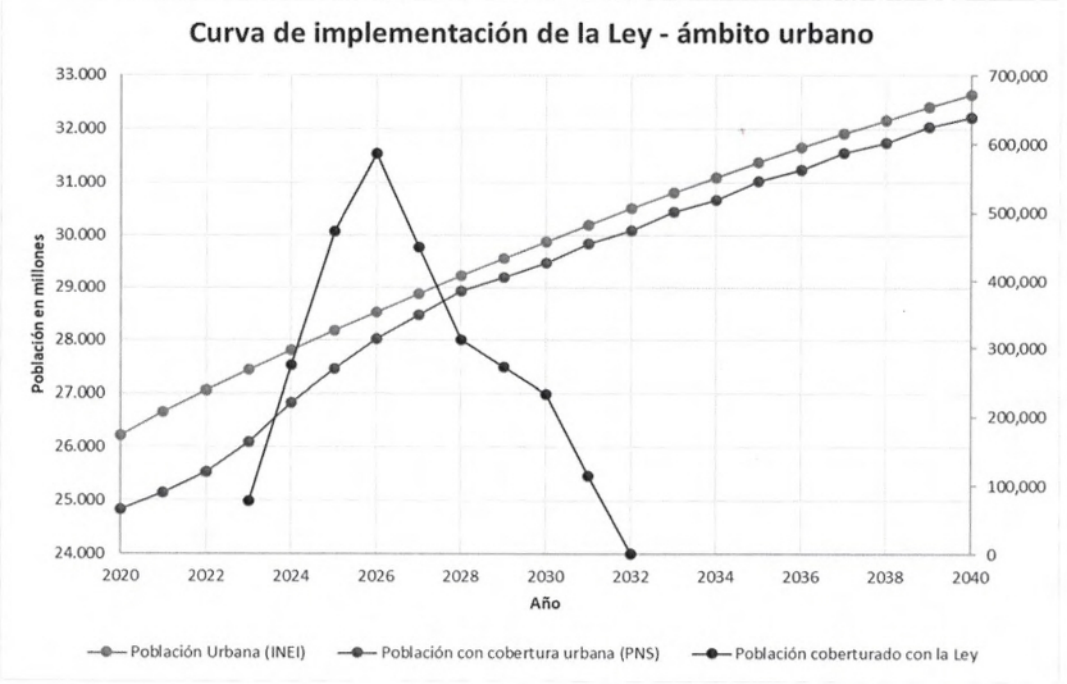
Tabla 8: Costo por abastecimiento directo por camiones cisternas para los años 1,2 y 3.

Programacion de Ejecucion Presupuestal	Costo anual por persona por abastecimiento directo mediante cisternas (*)	Población urbana	Población urbana con acceso (PNS+L)	Brecha Urbana implementando la Ley (Beneficiarios)	Costo por abastecimiento directo por camiones cisternas
Año 1	70.61	27,812,045	26,537,843	1,274,202	89,971,399
Año 2	70.61	28,177,110	27,430,860	746,250	52,692,736
Año 3	70.61	28,539,345	28,181,445	357,899	25,271,276
COSTO TOTAL					S/. 167,935,411

* Costo unitario promedio estimado en base al Informe N° 117-2022-ER de Sedapal y al Informe N° 240-2022-OTASS-DGF de OTASS
Elaboración: Propia

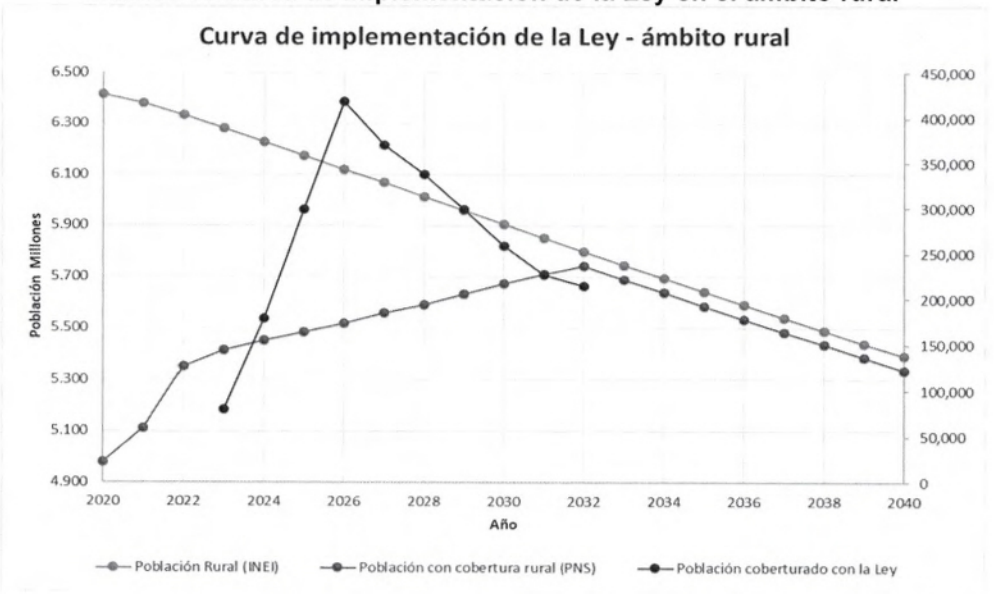
Asimismo, en los gráficos 6 y 7 se presentan la proyección de la implementación de la Ley, respecto al acceso del agua potable en los ámbitos urbano y rural, teniendo en consideración el crecimiento poblacional y el impacto de la Ley sumado a las brechas de cobertura establecidas en el Plan Nacional de Saneamiento, conforme a lo siguiente:

Gráfico 6: Curva de implementación de la Ley en el ámbito urbano



Según el gráfico 6, en el ámbito urbano, las intervenciones a ejecutar mediante la Ley, se proyectan realizar durante los primeros 4 años, que beneficiaría a 585 mil personas aproximadamente. Luego de ello, se prevé que se ejecuten acciones de Operación y Mantenimiento hasta el año 10 (año 2032).

Gráfico 7: Curva de implementación de la Ley en el ámbito rural



Asimismo, según el gráfico 7, en el ámbito rural, las intervenciones a ejecutar mediante la Ley, se proyectan realizar durante los primeros 4 años, que beneficiaría a 417 mil personas aproximadamente. Luego de ello, se prevé que se ejecuten acciones de Operación y Mantenimiento hasta el año 10.

Sobre la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley

> ***"TERCERA . Acciones complementarias de implementación***
>
> *Los Gobiernos Locales, los Gobiernos Regionales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y sus programas, y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS , efectúan las acciones necesarias para la implementación de lo dispuesto en la presente Ley."*

Con la Tercera Disposición Complementaria Final de la presente Ley se busca habilitar a los Gobiernos Regionales, al MVCS y sus programas, organismos públicos y entidades adscritas, tales como el OTASS y SEDAPAL, para realizar diversas acciones que contribuyan al acceso universal para el agua potable. Entre las acciones a realizar podemos señalar, entre otras, se encuentra el fortalecimiento de capacidades a los prestadores de servicios de saneamiento, a través de:

- Asistencia técnica para identificar el tipo de intervención e implementación.
- Capacitación para la formulación e implementación de tecnologías convencionales y no convencionales.
- Asistencia técnica para la operación y mantenimiento y sostenibilidad.
- Capacitación en educación sanitaria.

Sobre la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley

> ***"CUARTA . Aplicación a prestadores excepcionales***
>
> *Las disposiciones contenidas en la presente Ley referidas a EPS son de aplicación a los prestadores regulados en la Vigésimo Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento."*

La Cuarta Disposición Complementaria Final de la presente Ley tiene por finalidad precisar que las disposiciones contenidas en dicha norma son de aplicación a los prestadores regulados en la Vigésimo Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Marco.

Lo señalado se sustenta en la Vigésimo Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Marco que regula la prestación excepcional de los servicios de saneamiento ante la terminación de los contratos de Asociación Público Privada **(APP)**, estableciendo que el OTASS directa o indirectamente, a través de otro prestador, asume la prestación total de los servicios de saneamiento de manera provisional, hasta que los responsables de la prestación de los servicios de saneamiento, es decir, las municipalidades provinciales, acorde con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 27973, Ley Orgánica de Municipalidades, otorguen la explotación de los servicios de saneamiento a otro prestador de servicios.

En atención al mencionado marco legal, en la actualidad el OTASS, a través de la Unidad Ejecutora denominada "Servicios de Saneamiento Tumbes (AGUA TUMBES)", creada mediante Resolución Directoral N° 095-2018-OTASS/DE, la cual, para los efectos de la citada disposición complementaria final, constituye un prestador temporal y excepcional de los servicios de saneamiento que viene prestando dichos servicios a los usuarios de las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.

En tal sentido, constituyendo un prestador, temporal y excepcional, también podría servir como vehículo para ejecutar las intervenciones que permitan asegurar una dotación mínima a los beneficiarios, resulta necesario regular, a través de una

Disposición Complementaria Final, que las disposiciones contenidas en la propuesta referidas a empresas prestadoras de servicios de saneamiento resultan de aplicación a los prestadores regulados en la Vigésimo Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Marco. De esta forma, se garantiza que las medidas reguladas en la norma propuesta sean aplicables también a este tipo de prestadores.

Sobre la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley

> QUINTA . ***Almacenamiento seguro de agua potable***
>
> *Se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS y a los Gobiernos Regionales , a dotar de equipamientos que coadyuven a garantizar el almacenamiento y traslado seguro de agua potable para la población que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad, en el marco del acceso universal establecido en la presente Ley. El Reglamento de la presente Ley desarrolla lo dispuesto en la presente disposición.*

La Quinta Disposición Complementaria Final autoriza al MVCS y al OTASS a dotar de equipamiento que coadyuven a garantizar el almacenamiento y traslado seguro de agua potable para la población que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad, en el marco del acceso universal al agua potable establecido en la Ley.

Al respecto, debemos señalar que el almacenamiento y traslado seguro en el hogar se encuentra directamente relacionado con la disminución de la reproducción de mosquitos (*Aedes Aegypti*) infectados con dengue. En ese sentido, el almacenamiento y traslado seguro involucra combatir la proliferación del dengue principalmente en zonas periurbanas y del ámbito rural, para lo cual se debe seguir recomendaciones básicas para la correcta conservación del agua, siendo una de ellas el asegurar el correcto almacenamiento del agua. Para ello se necesita un adecuado equipamiento, como por ejemplo baldes herméticos, rueda de la vida, entre otros, que aseguren también el traslado seguro.

Así, para prevenir el dengue se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Para esto se debe:

- Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros.
- Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados.
- Lavar y cepillar tanques y albercas
- Rellenar con tierra tanques sépticos en desuso, desagües y letrinas abandonadas.
- Recoger basuras y residuos sólidos en predios y lotes baldíos, mantener el patio limpio y participar en jornadas comunitarias de recolección de inservibles con actividades comunitarias e intersectoriales.

En atención a ello, se considera necesario regular lo dispuesto en la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley, lo cual coadyuvará a garantizar el almacenamiento y traslado seguro del agua potable, cuya dotación estará a cargo del MVCS y del OTASS, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria asignada.

Sobre la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley

> ***SEXTA. Implementación progresiva***
>
> *La implementación de las intervenciones para el acceso universal al agua potable, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, se realiza de manera progresiva, sujeta a disponibilidad presupuestaria; para lo cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprueba la estrategia*

sectorial para garantizar el acceso universal al agua potable, así como una estrategia multisectorial para la identificación de fuentes de agua para su potabilización.

La Sexta Disposición Complementaria Final establece que la implementación de las intervenciones para el acceso universal al agua potable, se realiza de manera progresiva y sujeto a disponibilidad presupuestaria.

Sobre el particular, con la finalidad de cumplir con el rol del Estado, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) debe elaborar una estrategia para implementar el acceso universal al agua potable, en la cual se evidencien las acciones de las entidades sectoriales para la dotación de agua potable, prioritariamente, para la población en condición de pobreza o vulnerabilidad.

Cabe recordar que, como señaló el TC, no basta con reconocer el derecho al acceso al agua potable a nivel constitucional, resulta necesario para que los actores políticos adopten providencias a nivel interno y, de esta manera, nos acerquemos a una materialización progresiva del derecho en cuestión.

Complementando lo anteriormente indicado, también es necesario que se lleve a cabo una estrategia para la identificación de fuentes sin presencia de metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas; pues, dependerá de estas las fuentes que se encuentren para determinar la oferta hídrica que dará soporte a la dotación de agua potable a nivel nacional.

Al respecto, el artículo 76 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, señala que la Autoridad Nacional del Agua - ANA, en el lugar y el estado físico en que se encuentre el agua (fuentes de agua), sea en sus cauces naturales o artificiales, controla, supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua sobre la base de los ECA-Agua y las disposiciones y programas para su implementación establecidos por la autoridad del ambiente. También establece medidas para prevenir, controlar y remediar la contaminación del agua y los bienes asociados a esta. Asimismo, implementa actividades de vigilancia y monitoreo, sobre todo en las cuencas donde existan actividades que pongan en riesgo la calidad o cantidad del recurso.

Asimismo, el artículo 79 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud - MINSA, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, dispone que la DIGESA se encarga de dirigir las acciones vigilancia, supervigilancia y fiscalización en materia de Salud Ambiental, que comprende la calidad de agua para consumo humano, agua de uso poblacional y recreacional (playas y piscinas; características sanitarias de los Sistemas de abastecimiento y fuentes de agua para consumo humano).

En ese sentido, la citada estrategia deberá ser multisectorial, a fin de que se coordinen acciones para la identificación de fuentes; coadyuvar en la promoción del análisis del origen de la contaminación por metales pesados (trabajos de gabinete y campo, quien lo desarrolla); coordinar medidas para mitigar el riesgo o reducir la contaminación en las fuentes de agua con presencia de metales pesados, entre otras.

Sobre la Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley

*"SÉTIMA. **Fortalecimiento para la conservación de recursos hídricos***

La Autoridad Nacional del Agua vela por la protección y conservación de sus fuentes naturales de agua y promueve la remediación de la afectación de la calidad de los recursos hídricos. Para tal efecto, adopta, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las acciones necesarias para la implementación de lo dispuesto en la presente Ley."

Al respecto, de acuerdo al artículo 14 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, se establece que la ANA es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Es responsable del funcionamiento de dicho sistema.

En esa línea, el artículo 15 de la Ley N° 29338 establece que la ANA se encarga de elaborar la política y estrategia nacional de los recursos hídricos y el plan nacional de gestión de los recursos hídricos, conduciendo, supervisando y evaluando su ejecución; así como establecer los lineamientos para la formulación y actualización de los planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas, aprobarlos y supervisar su implementación.

Asimismo, con el artículo 35 de la mencionada ley, establece la prioridad para el otorgamiento y el ejercicio de los usos del agua, conforme a lo siguiente:

1. Uso primario.
2. Uso poblacional.
3. Uso productivo.

En atención a ello, los artículos 36 y 39 de la citada ley, define al uso primario y uso poblacional del agua como:

> "**Artículo 36.- Uso primario del agua**
> El uso primario consiste en la utilización directa y efectiva de la misma, en las fuentes naturales y cauces públicos de agua, con el fin de satisfacer necesidades humanas primarias. Comprende el uso de agua para la preparación de alimentos, el consumo directo y el aseo personal; así como su uso en ceremonias culturales, religiosas y rituales".

> "**Artículo 39.- Uso poblacional del agua**
> El uso poblacional consiste en la captación del agua de una fuente o red pública, debidamente tratada, con el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas: preparación de alimentos y hábitos de aseo personal. Se ejerce mediante derechos de uso de agua otorgados por la Autoridad Nacional".

En ese sentido, queda establecida la prioridad en el uso del agua es el satisfacer necesidades primarias humanas básicas.

Sumado a ello, la ANA vela por la protección y conservación de sus fuentes naturales de agua. Así, de acuerdo al artículo 75 de la Ley N°29338, la ANA, con opinión del Consejo de Cuenca, debe velar por la protección del agua, que incluye la conservación y protección de sus fuentes, de los ecosistemas y de los bienes naturales asociados a ésta en el marco de la Ley y demás normas aplicables. Para dicho fin, puede coordinar con las instituciones públicas competentes y los diferentes usuarios. La Autoridad Nacional, a través del Consejo de Cuenca correspondiente, ejerce funciones de vigilancia y fiscalización con el fin de prevenir y combatir los efectos de la contaminación del mar, ríos y lagos en lo que le corresponda. Puede coordinar, para tal efecto, con los sectores de la administración pública, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua.





Asimismo, la ANA promueve la remediación de la afectación de la calidad de los recursos hídricos, conforme es de apreciarse en el artículo 183 del Reglamento de la Ley N° 29338, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que establece lo siguiente:

> **"Artículo 183.- Destino de las retribuciones económicas por vertimiento de uso de agua residual tratada**
> Las retribuciones económicas por vertimiento de uso de aguas residuales tratadas en fuentes naturales de agua son destinadas preferentemente para monitorear, prevenir, controlar y promover la remediación de los daños ambientales en cuanto se refiere a la afectación de la calidad del agua y los bienes asociados a esta."



En atención a ello, a fin de garantizar, el acceso al agua potable de manera integral, la participación del ANA como actor clave en la implementación de las intervenciones descritas en la presente Ley es fundamental, ello permitirá impulsar con mayor fuerza las acciones que desarrolla el ANA y que contribuyan en el acceso al agua potable.

Sobre la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley

> OCTAVA. **Disposiciones para la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna**
>
> 1. Se autoriza a las EPS, hasta el Año Fiscal 2026, a realizar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna, a la población del ámbito urbano que no cuente con acceso al servicio de agua potable y que se encuentre en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. El reglamento de la presente ley desarrolla lo dispuesto en el presente párrafo, de conformidad con la estrategia sectorial para garantizar el acceso universal al agua potable.
>
> 2. Se faculta al Ministerio de Salud para que, en un plazo de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, apruebe el procedimiento de autorización sanitaria temporal para la distribución gratuita del agua para consumo humano a través de camiones cisternas.

Al respecto, con la finalidad de asegurar el abastecimiento gratuito de agua para consumo humano a la población sin acceso a los servicios de saneamiento mediante camiones cisterna, en tanto se implementan las intervenciones previstas en la propuesta de Ley, la presente disposición busca facultar a las EPS, de manera temporal, hasta el 2026, a realizar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna.

Asimismo, se dispone que el Ministerio de Salud apruebe el procedimiento para la autorización sanitaria temporal para la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna.

En esa línea, el artículo 39 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2010-SA, establece la competencia de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) o Gerencia Regional de Salud (GRS) o Dirección de Salud (DISA) para8 que en su jurisdicción otorguen la respectiva autorización sanitaria a los proveedores mediante camiones cisterna y otros medios en condiciones especiales de distribución del agua para consumo humano.

Asimismo, otro elemento a considerar para regular el procedimiento de aprobación automática en la presente disposición, es la existencia de diversidad de regulaciones regionales para obtener la autorización sanitaria para la distribución de agua potable mediante camiones cisternas, lo cual dificulta la labor que deben cumplir los prestadores de servicios de saneamiento para garantizar la continuidad de la prestación de dichos servicios a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad; por lo que, a efectos de viabilizar la efectividad de la medida propuesta en la presente norma, es necesario contar con un mecanismo transitorio para que las autoridades de salud competente, otorguen de manera célere la autorización sanitaria en mención.

Sobre la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley

> ***NOVENA. Adecuación***
>
> *En un plazo de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley, el Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-VIVIENDA.*

Con la Novena Disposición Complementaria Final se busca otorgar un plazo de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Ley, para que, a través del MVCS se apruebe la modificación al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-VIVIENDA.

Cabe indicar que, dicha disposición se sustenta en que con las Disposiciones Complementarias Modificatorias de la presente Ley se realizan diversas modificaciones al Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura; lo cual tendrá un impacto en la concordancia con su respectivo reglamento.

En atención a ello, resulta necesario establecer la presente redacción para modificar el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-VIVIENDA.

Sobre la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley

> ***PRIMERA.- Modificación de los artículos 1, 2, 3 7 y 8 del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura***
> *Modifícanse los artículos 1, 2, 3, 7 y 8 del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura, los mismos que quedan redactados en los siguientes términos:*
>
> ***Artículo 1. Creación y Finalidad del Fondo***
> *Créase el Fondo de Inversión para el Acceso al Agua Potable y a los Servicios de Saneamiento - FIAS, dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, con la finalidad de financiar total o parcialmente:*
> *1. Las intervenciones que aseguren el acceso universal al agua potable para la población, prioritariamente, que se encuentra en condición de pobreza o vulnerabilidad.*
> *2. Las inversiones, programas y/o actividades orientadas, según sea el caso, para el cierre de brechas de cobertura y calidad de los servicios de saneamiento, así como a la mejora en la eficiencia, sostenibilidad y equidad de la prestación de tales servicios en los ámbitos urbano y rural.*

El objeto de la modificación del presente Decreto Legislativo es un fondo que sea autosostenible en el tiempo, con fuentes de financiamiento permanentes y continuas que permitan la ejecución de inversiones, proyectos, programas y/o actividades en saneamiento; así como, para las intervenciones de acceso al agua potable.

Cabe indicar que, si bien se promulgó el marco normativo del FIAS (Decreto Legislativo 1284 y Decreto Supremo Nº 009-2017-VIVIENDA) y se designaron a los representantes en el Consejo Directivo (Resolución Ministerial Nº 191-2017-VIVIENDA), este fondo no pudo implementarse por falta de financiamiento. En ese sentido, dicho fondo no pudo financiar programas, proyectos y/o actividades orientados a cerrar brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional.

Sobre antecedentes de fondos autofinanciables, se tiene al Fondo de Compensación Social Eléctrica - FOSE, creado por la Ley N° 27510, Ley que crea el Fondo de la Compensación Social Eléctrica, el cual -sobre el financiamiento- dispone al pie de la letra lo siguiente:

> Artículo 2. Recursos
>
> El FOSE se financiará mediante un recargo en la facturación en los cargos tarifarios de potencia, energía y cargo fijo mensual de los usuarios de servicio público de electricidad de los sistemas interconectados no comprendidos en el artículo 1 de esta Ley, de los usuarios excluidos del descuento FOSE en virtud del artículo 3-A de la presente Ley; y, de los usuarios libres, incluyendo los retiros que efectúen los usuarios libres en el mercado mayorista de electricidad. Dicho recargo se establece en función a

un porcentaje que es determinado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en función a la proyección de ventas del periodo siguiente.

(el agregado es nuestro)

Asimismo, otro fondo que puede tomarse como referencia, es el Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, creado por la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, el cual -sobre el financiamiento- dispone al pie de la letra lo siguiente:

Artículo 4. Recursos del FISE

El FISE se financiará con los siguientes recursos:

4.1 Recargo en la facturación mensual para los usuarios libres de electricidad de los sistemas interconectados definidos como tales por el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley 25844, a través de un cargo equivalente en energía aplicable en las tarifas de transmisión eléctrica. Dicho cargo tarifario será equivalente al recargo en la facturación dispuesto por la ley de creación del FOSE, Ley 27510 y sus modificatorias.

4.2 Recargo al suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural, equivalente a US$ 1.00 por barril a los mencionados productos. El recargo se aplicará en cada venta primaria que efectúen los productores e importadores, definidos como tales en el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 032-2002-EM y será trasladado en los precios de los hidrocarburos líquidos.

4.3 Recargo equivalente a US$ 0,055 por MPC (Miles de Pies Cúbicos) en la facturación mensual de los cargos a los usuarios de transporte de gas natural por ductos, que incluye a los ductos de Servicio de Transporte, Ductos de Uso Propio y Ductos Principales, definidos como tales en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo 081-2007-EM. El recargo pagado por los generadores eléctricos es compensado mediante un cargo a ser incluido en el peaje del sistema principal de transmisión eléctrica, y es administrado y regulado por el Osinergmin según lo que dispone el reglamento.

(el agregado es nuestro)

Como puede observarse, existen antecedentes viables y exitosos sobre fondos que son autofinanciados a través de recargos en la tarifa de servicios; modelo en el que se basa la presente modificación del FIAS.

Sobre el particular, el artículo primigenio del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura, establece al pie de la letra lo siguiente:

Artículo 1. Creación y Finalidad del Fondo de Inversión Agua Segura

Créase el Fondo de Inversión Agua Segura - FIAS, dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, con la finalidad de financiar programas, proyectos y/o actividades orientados a cerrar brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, contribuyendo a la eficiencia económica y operativa de los prestadores de los servicios de saneamiento y a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.

Como se puede evidenciar, la presente Ley introduce fundamentalmente como novedad lo siguiente:

- El financiamiento puede ser total o parcial.
- Se pueden financiar intervenciones para el acceso universal al agua potable.
- Se pueden financiar Inversiones (proyectos de inversión e IOARR)

De lo expuesto se evidencia que, el abanico de posibilidades para financiar el FIAS se está ampliando, permitiendo que se cierren brechas de cobertura se servicios y acceso.

> ***Artículo 2. Destino de los recursos del FIAS***
> *2.1. Con los recursos del FIAS se financia lo siguiente:*
>
> *1. Inversiones para el sector saneamiento en la ejecución de obras de infraestructura y aquellas requeridas para la implementación de la hoja de ruta de economía circular, adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres, conservación de fuentes de agua.*
> *2. Actividades de operación, mantenimiento correctivo y preventivo para los sistemas del servicio de agua potable y saneamiento, y gestión de sostenibilidad del FIAS.*
> *3. Actividades vinculadas al fortalecimiento de capacidades de los prestadores a través de los gobiernos locales y empresas prestadoras de servicios de saneamiento, de los ámbitos urbano y rural, hasta con el 5% de los recursos del FIAS.*
> *4. Intervenciones para asegurar el acceso universal al agua potable en los ámbitos urbano y rural.*
> *5. Otras que determine el Reglamento de la presente norma.*
>
> *2.2. Las transferencias que se efectúen con recursos del FIAS a favor de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento adoptan la modalidad de aporte de capital ordinario o preferente, según las condiciones y procedimientos que establezca el Reglamento de la presente norma; a excepción de lo dispuesto en el inciso 4 del párrafo precedente.*
>
> *2.3. Las transferencias que se efectúen con recursos del FIAS a favor de los gobiernos locales adoptan la modalidad de subvención, cuyo porcentaje, condiciones, entre otros, se establecen en el Reglamento de la presente norma. Esto también es aplicable para las EPS, en lo referido al inciso 4 del párrafo 2.1 del presente artículo.*

Al respecto, con la modificación del artículo 2 del FIAS se modifica el epígrafe de dicho artículo por el "destino de los recursos del FIAS" a fin de dejar en claro que los recursos del FIAS sirven para financiar lo siguiente:

> *1. Inversiones para el sector saneamiento en la ejecución de obras de infraestructura y aquellas requeridas para la adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres y conservación de fuentes de agua.*
> *2. Actividades de operación, mantenimiento correctivo y preventivo para los sistemas del servicio de agua potable, y gestión de sostenibilidad del FIAS.*
> *3. Actividades vinculadas al fortalecimiento de capacidades de los prestadores a través de los gobiernos locales y empresas prestadoras de servicios de saneamiento, de los ámbitos urbano y rural, hasta con el 5% de los recursos del FIAS.*
> *4. Intervenciones para asegurar el acceso universal al agua potable en los ámbitos urbano y rural.*
> *5. Otras que determine el Reglamento de la presente norma.*

Asimismo, con la modificación al artículo 2 del FIAS, se hace un cambio en cuanto al diseño de las subvenciones establecidas originalmente. Así, la modificación a dicho artículo establece las siguientes modalidades de financiamiento:

- Devolución parcial o total de las transferencias que se efectúen con recursos del FIAS. Esta disposición aplica a favor de las EPS.
- Subvención de las transferencias que se efectúen con recursos del FIAS. Esta disposición aplica a favor de los gobiernos locales.

Cabe indicar que, cuando se trate del financiamiento a "*Intervenciones para asegurar el acceso universal al agua potable en los ámbitos urbano y rural*", independientemente sea a favor de la EPS o gobierno local, el financiamiento otorgado adquiere la condición de subvención.

Artículo 3. Fuentes del FIAS

3.1. Las fuentes de recursos del FIAS pueden ser las siguientes:

1. Transferencias financieras del MVCS y del OTASS en favor de las EPS, se aprueban mediante *Resolución del titular del pliego respectivo previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto de la Entidad o la que haga sus veces y acorde al monto máximo autorizado en las leyes anuales de presupuesto. Para tal fin se autoriza a los respectivos pliegos presupuestales a realizar transferencias financieras a favor del "Fondo de Inversión Agua Segura" con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.*
2. *Créditos de entidades de cooperación nacional, internacional o de instituciones financieras, preferentemente en soles, de acuerdo a la normatividad vigente.*
3. *Donaciones o transferencias provenientes de entidades públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras, según la normativa vigente.*
4. *Recargo tarifario en la facturación mensual hasta el 4% para los usuarios pertenecientes a la clase no residencial a que se refiere el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por empresas prestadoras de servicios de saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD o norma que la sustituya. El recargo tarifario a que hace referencia el presente numeral, se aprueba mediante Decreto Supremo refrendado por los/las titulares del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de la Presidencia del Consejo de Ministros, en este último caso, con opinión previa favorable de la SUNASS.*
5. *Recargo tarifario en la facturación mensual hasta el 3% para los usuarios pertenecientes a la clase residencial a que se refiere el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por empresas prestadoras de servicios de saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD o norma que la sustituya. El recargo tarifario a que hace referencia el presente numeral, se aprueba mediante Decreto Supremo refrendado por los/las titulares del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de la Presidencia del Consejo de Ministros, en este último caso, con opinión previa favorable de la SUNASS.*
6. *Otras fuentes de financiamiento permitidas por la normatividad vigente.*

3.2. Los recursos del FIAS, los intereses que devenguen y los recursos captados por la ejecución de garantías en la aplicación del artículo 9 de la presente Ley, tienen carácter intangible e inembargable, y se destinan única y exclusivamente a los fines a que se refiere la presente Ley. Los recursos del FIAS se depositan en la cuenta que determine la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Una de las deficiencias de los fondos de financiamiento de inversiones hasta la fecha en el sector saneamiento es que no han podido contar con los recursos necesarios para alcanzar las finalidades establecidas en sus normas de creación.

Tabla 9 : Fuentes de Financiamiento de Fondos de Saneamiento

Fondo de Inversión Social en Saneamiento - INVERSAN[13]	FIAS[14]
• El aporte inicial del Tesoro Público. • Recursos propios que pueda generar. • Cualquier otro aporte o donación que reciba, proveniente de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. • Los que obtenga de la cooperación nacional e internacional, dentro del marco de la normatividad legal vigente. • Los recursos que transfiera el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cada año, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 75, de la Ley N° 28411. • Otras fuentes de financiamiento.	• Transferencias financieras del pliego presupuestal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a propuesta de este último. • Créditos de entidades de cooperación internacional, preferentemente en soles, de acuerdo a la normatividad vigente. • Créditos de bancos y otras instituciones financieras, preferentemente en soles de acuerdo a la normatividad vigente. • Donaciones provenientes de entidades públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras, las que son entregadas en administración para los fines del objeto social. • Inversiones de Administradores de Fondos de Pensiones u otros inversionistas institucionales a cambio de una rentabilidad. • Capital obtenido en el mercado de capitales, de acuerdo a la normativa vigente. • Otras fuentes de financiamiento permitidas por la normatividad vigente.

Elaboración Propia.

Como puede evidenciarse del cuadro precedente, ninguno de los dos fondos en saneamiento ha podido establecer una fuente de financiamiento permanente y continua en el tiempo, que permita alcanzar sus finalidades.

Dado que el INVERSAN y el actual FIAS han estado supeditados a donaciones o habilitaciones presupuestales, las cuales nunca se concretaron, ambos fondos no han podido financiar programas, proyectos y/o actividades orientados a cerrar brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional.

Por lo tanto, con la finalidad de que el FIAS pueda concretar el acceso a los servicios de saneamiento y el acceso al agua potable, se ha establecido las siguientes fuentes de financiamiento:

- Recargo tarifario en la facturación mensual hasta el 4% para los usuarios pertenecientes a la clase no residencial a que se refiere el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por empresas

[13] Ley N° 29061, Ley que crea el Fondo de Inversión Social en Saneamiento (INVERSAN); cuyas finalidades son:

- Canalizar y organizar los esfuerzos dispersos de apoyo técnico y asesoramiento financiero, provenientes de la cooperación de las dependencias públicas y privadas, así como de los organismos multilaterales, entre otros, en materia de saneamiento;
- apoyar la ejecución de la política del Sector, mediante el financiamiento de los programas, proyectos y/o actividades referidas al mejoramiento, ampliación y desarrollo de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y disposición sanitaria de excretas, así como de las actividades vinculadas al Servicio Ambiental Hídrico;
- apoyar el fortalecimiento de capacidades y competencias institucionales de las Entidades Prestadoras de Servicios, municipalidades, Organizaciones Comunales y Operadores Especializados a que se refiere el artículo 4 del Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.

[14] Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura, cuya finalidad es financiar programas, proyectos y/o actividades orientados a cerrar brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional, contribuyendo a la eficiencia económica y operativa de los prestadores de los servicios de saneamiento y a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.

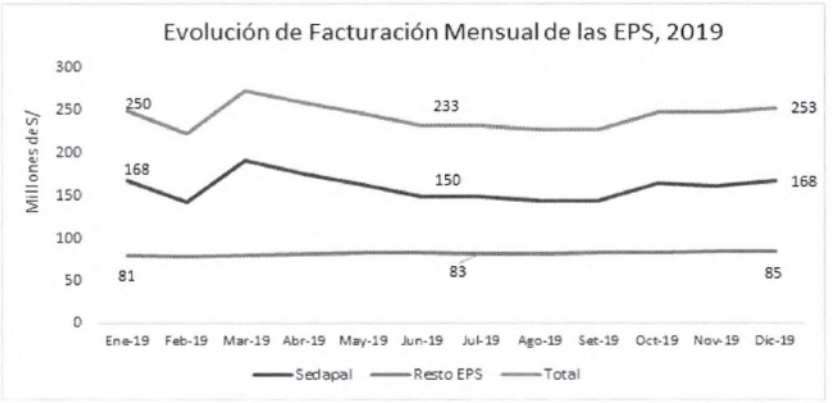
prestadoras de servicios de saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD o norma que la sustituya.

- Recargo tarifario en la facturación mensual hasta el 3% para los usuarios pertenecientes a la clase residencial a que se refiere el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por empresas prestadoras de servicios de saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD o norma que la sustituya.

Como puede evidenciarse, la modificación propuesta para el FIAS ha establecido como fuente de financiamiento permanente y continua en el tiempo el recargo en la facturación mensual los usuarios pertenecientes a la clase no residencial y clase residencial.

Al respecto, sobre el recargo en la facturación mensual de los usuarios pertenecientes a la clase no residencial y clase residencial, como fuente de financiamiento del FIAS, es necesario señalar que las EPS registraron un importe facturado por la prestación de los servicios de saneamiento de S/ 2,9 mil millones en el año 2019, teniendo a la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL con un monto facturado de S/ 1,9 mil millones en dicho año, representando así el 668% del importe total facturado por las empresas prestadoras.

Gráfico 8: Evolución de facturación mensual de la EPS



Fuente: Empresas Prestadoras – 2019

Adicionalmente es preciso señalar que empleando datos de la facturación a nivel nacional EPS (2019-2020) y asignando un coeficiente de participación estimado por Clases Residenciales y No residenciales en el ámbito nacional, y aplicando un recargo de hasta 3% y 4% para cada tipo de usuario, se estima una oferta promedio anual de S/. 100 millones de soles en favor del FIAS y una muestra de cómo se refleja este recargo en la facturación mensual es asumiendo el valor de la facturación promedio en aproximadamente S/. 50.00 donde el 3% representa a S/. 1.50 de recargo proyectado para el cumplimiento de los objetivos de la ley de acceso universal.

Tabla N°10 : Facturación por Clase EPS 2019-2020

Concepto	% Participación por clase 1/	Año 2019	Año 2020
Facturación Total	100%	2,924,506,528.23	2,782,550,993.60
Clase residencial	56%	1,632,357,415.23	1,553,122,793.13
Clase no residencial	44%	1,292,149,113.00	1,229,428,200.46

1/ Tomado en base al Estudio Tarifario de SEDAPAL 2022-2027

Tabla N° 11: Recaudación Estimada por Recargo en Facturación

Clase	Recargo sobre la facturación	Monto anual (2019)	Monto anual (2020)
Clase residencial	3%	48,970,722.46	46,593,683.79

Clase no residencial	4%	51,685,964.52	49,177,128.02
Recaudación total anual		100,656,686.98	95,770,811.81

Elaboración propia

"***Artículo 7.- Del uso de los recursos***
Los recursos del FIAS, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se determinan en las leyes anuales de presupuesto según las fuentes de financiamiento señaladas en el artículo 3 de la presente Ley.

En el caso de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, el MVCS queda autorizado para efectuar transferencias financieras, que se aprueban mediante resolución del Titular del MVCS, a favor de dichas empresas, acorde a los montos máximos que se dispongan en las leyes de presupuestos anuales."

Con la modificación al artículo 7 del FIAS se busca habilitar a que los pliegos respectivos (Gobiernos Locales, MVCS y OTASS) incorporen en sus respectivos pliegos el financiamiento del FIAS. Asimismo, se habilita para que el MVCS transfiera a las EPS, a recibir las transferencias financieras correspondientes.

Con la modificación al artículo 7 se precisa que los recursos del FIAS se determinan en las leyes anuales de presupuesto, así como se habilita al MVCS a efectuar transferencias financieras a las EPS, las mismas que se aprueban mediante resolución del Titular del MVCS, acorde a los montos máximos que se dispongan en las leyes de presupuestos anuales.

Artículo 8. Participación de los Programas del MVCS
En las operaciones señaladas en el artículo 2, el FIAS puede solicitar opinión técnica de los Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en materia de acceso universal al agua potable y servicios de saneamiento sobre las solicitudes de financiamiento, de acuerdo con su ámbito de acción.

Asimismo, se establece que el FIAS, en las operaciones señaladas en el artículo 2, puede solicitar opinión técnica de los Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para atención se solicitudes que versen sobre acceso universal al agua potable y servicios de saneamiento.

Sobre la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley

SEGUNDA. Incorporación de los artículos 10 y 11 del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura

Incorpóranse los artículos 10 y 11 del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura, los mismos que quedan redactados en los siguientes términos:

Artículo 10.- Autorización excepcional
10.1. Autorizase al MVCS para que a través del FIAS reciba, adicionalmente, los siguientes recursos:

1. *Los efectuados por las empresas prestadoras de servicios de saneamiento que recauden por la aplicación de subsidios cruzados entre empresas prestadoras determinados por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass, en atención a lo dispuesto en el párrafo 183.2 del artículo 183 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, o la norma que haga sus veces.*

2. *Los efectuados por las instituciones públicas o privadas que decidan realizar transferencias financieras a través del FIAS a favor de una determinada empresa prestadora de servicios de saneamiento o gobierno local, conforme a lo señalado en el artículo 2 de la presente Ley.*

3. *Los recursos transferidos para la implementación de lo dispuesto en el Título III del Decreto Legislativo N° 1359, Decreto Legislativo que establece medidas para el saneamiento financiero sobre las deudas de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal.*

10.2. Los recursos a que se refieren los numerales precedentes se registran en contabilidad separada hasta la entrega al beneficiario, y se destinan única y exclusivamente a los fines para los que fueron creados o transferidos.

De acuerdo al artículo 183 del TUO del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, hace referencia a subsidios cruzados, señalando que la SUNASS, de conformidad con el artículo 77 de la Ley Marco, mejora el sistema de subsidios cruzados, sin afectar el equilibrio económico-financiero del prestador de servicios, aplicables a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza, utilizando la clasificación socio económica vigente otorgada por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), el catastro comercial de los prestadores de servicios, el mapa de pobreza y/o los planos estratificados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y/u otras fuentes de información.

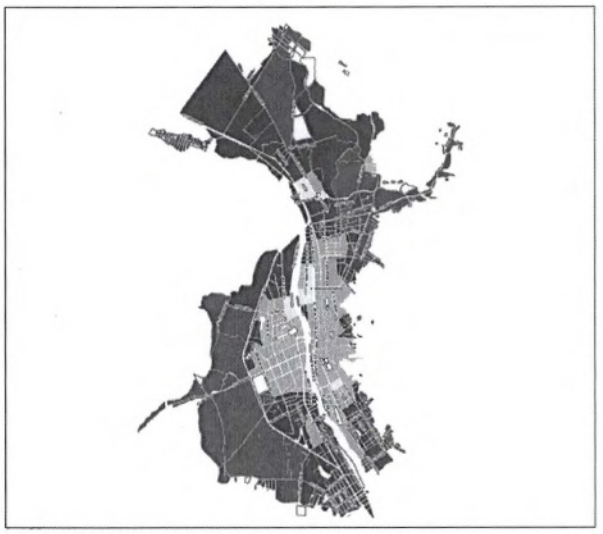
Las empresas prestadoras ya aplican los subsidios cruzados focalizados entre los usuarios de la misma empresa prestadora, en base a los planos estratificados por ingreso a nivel de manzanas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Es así como los usuarios de la categoría doméstica, ubicados en manzanas clasificadas como estrato bajo y medio bajo, según dichos planos estratificados, son beneficiarios de una tarifa de agua potable subsidiada por los usuarios domésticos ubicados en manzanas de estratos medio, medio alto y alto, y usuarios de la clase No Residencial.

Ahora bien, pueden darse casos en los que la base subsidiante (usuarios de la clase No Residencial y Domésticos de estratos medio, medio alto y alto) no sea suficiente para subsidiar a los usuarios domésticos de bajos ingresos, dentro del ámbito de un determinado prestador. Por ejemplo, en el caso del distrito de Sicuani - Cusco, tenemos que el 60% de los hogares están ubicados en manzanas de estrato bajo y medio bajo; sin embargo, en distritos de estratos altos como Miraflores - Lima, la totalidad de sus habitantes están ubicados en manzanas de altos ingresos, según los Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas 2020 del INEI, como podemos apreciar en los gráficos siguientes:

Gráfico 9

DISTRITO SICUANI

PLANO ESTRATIFICADO REGIONAL A NIVEL DE MANZANA POR INGRESO PER CÁPITA DEL HOGAR



POBLACIÓN Y MANZANAS (PORCENTAJE)

ESTRATO	INGRESO PER CÁPITA POR HOGARES (Soles)*	PERSONAS %	HOGARES %	MANZANAS %
Alto	1,526.73 a más			
Medio alto	1,130.00 - 1,526.72	3.1	3.3	3.2
Medio	849.95 - 1,129.99	35.1	36.7	34.4
Medio bajo	616.58 - 849.94	40.6	40.0	43.5
Bajo	616.57 a menos	21.2	20.0	18.9
TOTAL		100.0	100.0	100.0

* A Precios Reales

Fuente: "Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas 2020 – Según ingreso per cápita del hogar" del INEI

Gráfico 10

DISTRITO MIRAFLORES

PLANO ESTRATIFICADO REGIONAL A NIVEL DE MANZANA POR INGRESO PER CÁPITA DEL HOGAR



POBLACIÓN Y MANZANAS (PORCENTAJE)

ESTRATO	INGRESO PER CÁPITA POR HOGARES (Soles)*	PERSONAS %	HOGARES %	MANZANAS %
Alto	2,412.45 a más	100.0	100.0	100.0
Medio alto	1,449.72 - 2,412.44			
Medio	1,073.01 - 1,449.71			
Medio bajo	863.72 - 1,073.00			
Bajo	863.71 a menos			
TOTAL		100.0	100.0	100.0

* A Precios Reales

Fuente: "Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas 2020 – Según ingreso per cápita del hogar" del INEI

Es así que, contar con un sistema de subsidios cruzados focalizados entre usuarios de diferentes prestadores, es una oportunidad para reducir la8 brecha de acceso en el ámbito de prestadores cuyos usuarios son principalmente de estrato bajo y medio bajo.

Cabe precisar que, los recursos y su distribución son destinados únicamente para los fines identificados por la Sunass.

Como consecuencia de esta problemática, el numeral 2 del artículo 182 del Reglamento de la Ley Marco, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, establece que -en concordancia con el principio de equidad social- los subsidios cruzados pueden ser entre usuarios de la misma empresa prestadora o entre usuarios de distintas empresas.

Ahora bien, el subsidio cruzado entre usuarios de distintas empresas prestadoras no ha logrado implementarse, debido a que no se cuenta con un fondo en el que se puedan depositar los recursos obtenidos del recargo en la tarifa de los usuarios de las empresas prestadoras en el marco de este subsidio. En ese sentido, la modificación del FIAS se presenta como oportunidad para resolver este punto crítico y como consecuencia, beneficiar a los usuarios domésticos de bajos ingresos.

Por lo tanto, se debe autorizar al FIAS a recibir este tipo de recursos, los cuales deberán registrarse en una contabilidad separada, lo cual será precisado en el reglamento de la presente Ley, a fin de que sean transferidos a sus beneficiarios. Esto, conforme a lo que establezca la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass) en cada Resolución de Consejo Directivo, que establece la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión aplicables a cada empresa prestadora para cada periodo regulatorio determinado, conforme al Reglamento General de Tarifas aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD o norma que la sustituya.

Asimismo, el FIAS también podría recibir recursos por parte de instituciones públicas o privadas dirigidas a financiar la ejecución de alguna obra de saneamiento o intervención en el acceso al agua potable, a cargo de una EPS o el gobierno local.

Finalmente, el FIAS también podría ser el vehículo para salvaguardar los fondos que se transfieran al MVCS para el saneamiento financiero de las empresas prestadoras en el marco del *Título III del Decreto Legislativo N° 1359, Decreto Legislativo que establece medidas para el saneamiento financiero sobre las deudas de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.*

Artículo 11.- Transparencia

El MVCS, a través del Consejo Directivo, en su condición de máxima autoridad del FIAS, presenta a la Contraloría General de la República, en un plazo máximo de noventa (90) días hábiles contados a partir del cierre de cada ejercicio anual, un informe sobre la aplicación y ejecución del fondo, el mismo que se publicará en su portal institucional.

Finalmente, en concordancia con el principio de transparencia en la administración pública, se incluye el artículo 11 al FIAS a fin de establecer la obligación del MVCS, a través del Consejo Directivo del FIAS, en presentar a la Contraloría General de la República un informe sobre la aplicación y ejecución del fondo, a los noventa (90) días hábiles contados a partir del cierre de cada ejercicio anual.

V. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La implementación de la norma y, de manera específica, la implementación de las intervenciones se financiará con los recursos del FIAS, creado por el Decreto Legislativo N° 1284.

Al respecto, el costo total de la intervención, asciende a:

Tabla 12: Costos totales de intervención (en miles)

Horizonte de O&M	Costo de O&M Urbano	Costo O&M Rural	Infraestructura	Total, Inversiones (Infraestructura + O&M)	Población Total (Benef.)
Año 1	21,697	20,830	143,250	185,777	**259,917**
Año 2	55,009	35,366	152,165	242,540	**286,664**
Año 3	82,973	51,687	143,737	278,397	**267,179**

Año 4	101,005	64,852	102,945	268,802	**189,299**
Año 5	69,314	52,354	0	121,669	
Año 6	45,996	44,022	0	90,019	
Año 7	40,403	38,208	0	78,611	
Año 8	34,810	32,393	0	67,204	
Año 9	18,032	27,854	0	45,886	
Año 10	0	26,222	0	26,222	
COSTO TOTAL	**469,240**	**393,787**	**542,098**	**S/. 1,405,125**	**1,003,058**

Nota: El costo de la infraestructura incluye el equipamiento e insumo.
Elaboración: PROPIA.

Tabla 13: Costos totales de intervención (en miles)

Programacion de Ejecucion Presupuestal	Costo anual por persona por abastecimiento directo mediante cisternas (*)	Población urbana	Población urbana con acceso (PNS+L)	Brecha Urbana implementando la Ley (Beneficiarios)	Costo por abastecimiento directo por camiones cisternas
Año 1	70.61	27,812,045	26,537,843	1,274,202	89,971,399
Año 2	70.61	28,177,110	27,430,860	746,250	52,692,736
Año 3	70.61	28,539,345	28,181,445	357,899	25,271,276
COSTO TOTAL					S/. 167,935,411

* Costo unitario promedio estimado en base al Informe N° 117-2022-ER de Sedapal y al Informe N° 240-2022-OTASS-DGF de OTASS
Elaboración: Propia

Sobre los beneficios esperados, la norma representa una herramienta eficaz porque, en concordancia con el Plan Nacional de Saneamiento, el beneficio social esperado por la instalación de los sistemas de distribución de agua potable mediante piletas públicas y los sistemas de distribución de agua potable mediante reservorios móviles, es el siguiente:

- El ahorro de recursos para los hogares propuestos en la mencionada fase; ya que, con la sustitución del abastecimiento de agua de medios informales hacia los sistemas mencionados, existiría una reducción en el precio del servicio del agua potable.
- El beneficio por el incremento en el consumo de agua, al contar con mayores recursos producto de la reducción en el precio del agua potable, a fin de adquirir una mayor dotación en metros cúbicos (m^3) del citado recurso.
- El incremento de los ingresos de las EPS por la prestación del servicio de agua potable a localidades que antes no contaban con el servicio de agua potable.
- La reducción del gasto asumido por el Estado, respecto al tratamiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA) y anemia (principalmente, en niños menores de 5 años).

Al respecto, en el año 2015, la Sunass[15] informó que el precio pagado por los hogares de Lima y Callao que no contaban con acceso al servicio de agua potable mediante la red pública era seis (6) veces más que el pagado por un hogar conectado a la red pública de SEDAPAL, llegando a pagar en promedio S/ 15.00 el m^3 de agua y consumir 4.8 m^3 al mes[16]. Para estimar un valor actualizado al 2022 del precio promedio pagado, en m^3 de agua a nivel nacional, por los usuarios no conectados a la red pública, consideramos la relación del gasto en el servicio de agua de los hogares de Lima entre el promedio nacional, así como el incremento del gasto de los hogares en el servicio de agua hasta el año 2019

15 Sunass (2015). Sunass: Comprar agua por camión cisterna les cuesta a las familias limeñas 72 soles mensuales. Nota de prensa N° 161-2015.

16 En los distritos de Lima Sur, más alejados de la ciudad, el precio resultaba mayor, de S/ 22.56 el m3, a la vez que el consumo de agua era de 3.9 m3.

(antes de la pandemia por COVID-19)[17], con lo que se obtiene un precio de S/ 17.00 (diecisiete con 00/100 soles) el m^3 de agua para los mencionados usuarios[18].

A partir de este resultado se estima el beneficio social esperado por la reducción del gasto anual de los hogares conformado por: i) el ahorro de recursos de los hogares asociado con la reducción del precio que pagarían los hogares por el servicio de agua potable, de S/. 17.00 (diecisiete con 00/100 soles) el m^3 a una tarifa social (promedio de S/ 1.5 en ámbito urbano y de S/ 1.02 en ámbito rural por m^3); ii) el incremento en el consumo mensual de agua del hogar (p.ej. de 4.8m^3 a 5.5 m^3 al mes)[19]; y iii) los ingresos que obtendrían las EPS por la prestación del servicio.

Según se muestra en la Tabla N° 12, la implementación de las intervenciones permitiría que se genere un beneficio mensual de S/ 88.00 (Ochenta y siete con 00/100 soles) por hogar. De esta manera, considerando que la implementación tendría un alcance de 1,003,059 beneficiarios, se obtendría un beneficio anual por reducción del gasto de los hogares en el servicio de agua de S/ 2,101,766.69 (Dos millones ciento un mil setecientos sesenta y seis con 69/100 soles).

Tabla N° 14: Estimación del beneficio anual generado por la reducción en el gasto anual de los hogares en el servicio de agua

Con acceso al agua potable mediante piletas públicas	Nombre de variable	Notación	Valor
Sin acceso al agua potable por red pública	Precio del m^3 de agua por cisterna (S/)	P_0	S/ 17.00
	Consumo de agua por hogar en m^3	Q_0	4.8
Con acceso al agua potable mediante piletas públicas	Tarifa social del m^3 de agua (S/)	P_1	S/ 1.30
	Consumo de agua por hogar en m^3	Q_1	5.5
Beneficios generados	Ahorro de recursos	$B1 = Q_0*(P_1 - P_0)$	S/ 75.36
	Mayor consumo	$B2 = (Q_1 - Q_0) * (P_0 - P_1)/2$	S/ 5.49
	Ingreso para las EPS	$IT = Q_1*P_1$	S/ 7.15
	Beneficio social generado por hogar	BSH=B1+B2+IT	S/ 88.01
	Número de miembros por hogar	PH	3.5
	N° beneficiarios	N	1,003,058

[17] Ello, debido a que el consumo promedio de los usuarios residenciales de SEDAPAL, correspondiente a la categoría social se mantuvo estable en el periodo 2016 – 2019, por lo que el incremento del gasto en el servicio de agua podría atribuirse a incrementos en el precio. Fuente: Estudio Tarifario de SEDAPAL S.A. del periodo 2022-2027. Página 107.

[18] De acuerdo a la ENAHO del INEI, el gasto promedio mensual en el servicio de agua mediante camiones cisternas en el año 2015 fue de S/ 43.9 para Lima y S/ 39.0 promedio nacional, mientras que en el año 2019 fue de S/ 52.6 y S/ 50.3, respectivamente. De esta manera, para un mismo consumo de agua, el precio del m3 de agua mediante cisternas a nivel nacional habría sido de S/13.3 (S/ 39.0 x S/15 / S/43.9) en el 2017 y de S/ 17 el m^3 (S/ 13.3 x S/50.3 / S/39.0) en el 2019.

[19] Asociado a un consumo de agua de 52 litros por persona por día (poco más de 50 l/p/d). Se consideran 3.5 personas por hogar.

Con acceso al agua potable mediante piletas públicas	Nombre de variable	Notación	Valor
	Beneficio social generado por gasto anual	BS=BSH*N/PH*12	S/ 2,101,766.69

Elaboración: PROPIA.

Para la estimación del ahorro del Estado por la reducción en los casos atendidos de EDA y anemia se utilizaron los datos de la "Estrategia para incrementar el porcentaje de hogares rurales con acceso a agua clorada en zonas rurales del Perú". De acuerdo con el documento, los casos de enfermedad atendidos por el Estado en las zonas rurales durante el año 2017 por EDA y anemia fueron de 1.12 y 1.05 millones, respectivamente, lo que significa que en promedio se presentaron 18.5 y 17.3 casos de EDA y anemia por cada cien personas[20].

Considerando los resultados antes mencionados, así como la población beneficiaria prevista de 1,003,059 personas, la reducción en las incidencias de estas enfermedades producto del acceso a agua potable (estimados en 37% para la EDA (WHO,2008)[21] y 43% para la anemia (BID, 2018)[22]) y el costo marginal actualizado de la atención de casos de S/ 82.3 por EDA y S/ 180.4 por anemia[23]; se obtiene un ahorro promedio anual para el Estado de S/ 565 millones por los casos evitados de EDA y S/ 1 346 millones por anemia.

Tabla 15: Estimación del beneficio anual por ahorro en tratamiento de EDA y anemia

Variable		EDA	Anemia
Casos atendidos por cada 100 personas	a	18.5	17.3
Población beneficiaria	b	1,003,058	1,003,058
Reducción en la incidencia de enfermedades	c	37%	43%
Casos evitados	d=a*b*c	6,865,937	7,461,754
Costo marginal de la atención de casos (S/)	e	S/ 82.30	S/ 180.40
Beneficio total por ahorro en tratamiento (millones de soles)	**e*d**	**S/ 565**	**S/ 1,346**

Elaboración: PROPIA.

Los resultados de la estimación del beneficio social por acceso al agua potable son mostrados en la Tabla 14. Según se observa, el beneficio total anual generado por la

20 Según se señala en el documento, el acceso a agua segura permitiría reducir la incidencia en enfermedades diarreicas en 37%(371,132 casos evitados) y en 43% los casos de anemia (431,315 casos evitados). De acuerdo con estos resultados, los casos de enfermedades diarreicas en el 2017 dentro del ámbito rural fueron de 1,121,457 y de anemia 1,047,228. Siendo la población del ámbito rural en el año 2017 de 6,069,991, se obtuvieron 18.5 y 17.3 casos por EDA y anemia por cada 100 personas.

21 WHO (2008). "Water quality interventions to prevent diarrea: Cost and cost-effectiveness".

22 BID (2018). Los súper héroes del desarrollo en el Perú.

23 Valores actualizados al 2022, mediante inflación, de los presentados en MVCS (2019). "Estrategia para incrementar el porcentaje de hogares rurales con acceso a agua clorada en zonas rurales del Perú".

intervención sería de S/ 1 913 millones, siendo la mayor parte del beneficio proveniente del ahorro en tratamiento Anemia (S/ 1 346 millones por año).

Tabla N° 16 . Estimación del beneficio social anual por la intervención

Concepto	Monto (millones de soles)		
	URBANO	RURAL	NACIONAL
Beneficio total por gasto anual	1.2	0.9	2.1
Beneficio total por ahorro en tratamiento EDA	330	235	565
Beneficio total por ahorro en tratamiento Anemia	785	561	1,346
Beneficio total anual	**1,116**	**797**	**1,913**

Elaboración: PROPIA.

Para la evaluación de la rentabilidad social de la intervención se considera un periodo de 10 años de operación debido a que estos proyectos serían temporales, al ser sustituidos por la implementación de un proyecto de acceso al servicio de agua potable.

Tabla 17: Flujo de caja de las intervenciones de la estrategia de acceso universal (en millones de soles)

BENEFICIOS	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Beneficio Social		2,144,763	2,166,211	2,187,873	2,209,752	2,231,849	2,254,168	2,276,709	2,299,477	2,322,471	2,345,696
Beneficio por EDA		5,707,174	5,764,246	5,821,889	5,880,107	5,938,909	5,998,298	6,058,281	6,118,863	6,180,052	6,241,853
Beneficio por anemia		13,595,618	13,731,574	13,868,890	14,007,579	14,147,654	14,289,131	14,432,022	14,576,342	14,722,106	14,869,327
COSTOS											
OyM		872,622	881,348	890,162	899,063	908,054	917,134	926,306	935,569	944,924	954,374
Inversión	542,098										
FLUJO DE CAJA	-542,098	20,574,934	20,780,683	20,988,490	21,198,375	21,410,358	21,624,462	21,840,707	22,059,114	22,279,705	22,502,502

*Los beneficios y costos se afectan por la tasa de crecimiento anual de 1% (INEI, 2017)
Elaboración: PROPIA.

Por su parte, de acuerdo con los resultados mostrados, la intervención es rentable socialmente, lo que significa que los beneficios superan a los costos.

En el caso de las piletas públicas los beneficios superan ampliamente lo invertido y los costos de operación y mantenimiento (estos incluyen las acciones de fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica y sensibilización en educación sanitaria, etc.); además, se logra obtener un rendimiento mayor a la tasa de descuento social del 8% para proyectos sociales. Cabe señalar que, estos resultados serían mayores si se considera también el ahorro de costos de la atención privada, los costos asociados con los años de repitencia de la población que sufrió enfermedades en su niñez y la pérdida de productividad y salario debido a un menor desarrollo cognitivo y muertes prematuras.

De otro lado, con relación a las modificaciones e incorporaciones al FIAS, debe señalar que la propuesta normativa resulta de vital importancia y urgencia porque permitirá alcanzar el acceso universal al agua potable, prioritariamente, para población en condición de pobreza o vulnerabilidad, así como alcanzar la cobertura y la calidad de los servicios de saneamiento.

Asimismo, la propuesta normativa tendrá un costo de implementación que será asumida parcialmente por un sector de la población, que formará parte de los recursos del FIAS a través del pago de un porcentaje en sus tarifas; sin embargo, estos costos serán superados

por los beneficios, debido a que coadyuvará al cierre de brechas en el ámbito rural, permitiendo el desarrollo de las zonas beneficiadas preservando la salud de sus habitantes.

En atención a ello, a partir del análisis de los costos y beneficios realizados, y teniendo en cuenta que la norma es de interés público, es decir que predominan los intereses generales sobre los particulares, se concluye que la norma tiene un balance positivo de los beneficios respecto de los costos, toda vez que contribuye a la mejora de la gestión de la calidad de agua en beneficio de la salud de la población. Cabe resaltar que la emisión de la norma no implica un debilitamiento o reducción en la legislación vigente, puesto que busca garantizar el acceso universal al agua potable.

VI. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente norma busca aprobar la Ley que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable para la población que se encuentra en condición de pobreza monetaria. En ese sentido, con la presente Ley se busca establecer un nuevo marco normativo que habilite a realizar intervenciones para el acceso al agua potable en beneficio de la población que no cuenta actualmente con acceso a dicho recurso. Asimismo, es preciso señalar que, la presente Ley complementa el marco normativo vigente (Ley Marco y su Reglamento).

Sumado a ello, de acuerdo a las Disposiciones Complementarias Modificatorias de la presente Ley, se busca modificar el Decreto Legislativo N° 1284, con la finalidad que dicho marco normativo que regula el FIAS, sea concordante con las disposiciones sobre Acceso Universal al Agua Potable.

6.1 Análisis de la legalidad y constitucionalidad

El artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. De igual modo, el artículo 7-A de la Carta Magna[24] dispone de manera expresa que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable; en ese sentido, el Estado debe garantizar este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos, y promoviendo el manejo sostenible del agua[25].

En concordancia con el mandato constitucional, el Tribunal Constitucional señaló en su oportunidad, que corresponde al Estado, dentro de su inobjetable rol social y en razón de su objetivo primordial de protección del ser humano y su dignidad, fomentar que el agua potable se constituya no sólo en un derecho de permanente goce y disfrute, sino a la par, en un elemento al servicio de un interminable repertorio de derechos, todos ellos de trascendencia para la realización plena del individuo[26].

6.2 Análisis de la modificación del Decreto Legislativo N° 1284

La propuesta normativa dispone la modificación del Decreto Legislativo N° 1284, Decreto Legislativo que crea el FIAS con el fin de ampliar el marco normativo que permita financiar total o parcialmente las intervenciones previstas en la Ley, así como los programas y/o actividades orientadas al cierre de brechas de acceso y calidad de los servicios de saneamiento, así como a la mejora en la eficiencia, sostenibilidad y equidad de la prestación de tales servicios en los ámbitos urbano y rural.

Finalmente es preciso indicar que, la presente Ley, no contraviene obligaciones de los tratados internacionales ratificados por el Estado.

DGPRCS V°B°

[24] Incorporado mediante Ley N° 30588, Ley de Reforma Constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho fundamental.

[25] El agua es un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la nación.

[26] Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente STC N° 6534-2006-AA/TC, fundamento 18. Disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/06534-2006-AA.pdf

VII. IMPROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO – AIR EX ANTE

Mediante correo electrónico de fecha 07 de julio de 2023, la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria informa al MVCS que la presente norma no desarrolla procedimientos administrativos bajo el alcance del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), por lo que no se requiere realizar un ACR Ex Ante previo a su aprobación.

Asimismo, informa que dicha comisión declara la improcedencia del AIR Ex Ante de la presente Ley, en virtud a la excepción establecida en el numeral 18 del inciso 28.1 del artículo 28 del Reglamento del AIR Ex Ante, aprobado por Decreto Supremo N° 063-2021-PCM; por lo tanto, no se requiere realizar el AIR Ex Ante por parte del MVCS, conforme a lo siguiente:

> "(...) En consecuencia, el proyecto normativo no establece nuevas obligaciones que limiten derechos de privados, encontrándose por tanto fuera del alcance del AIR Ex Ante establecido en el inciso 10.1 del artículo 10 del Reglamento del AIR Ex Ante.
>
> Por decisión en mayoría de la CMCR, se declara improcedencia del AIR Ex Ante del proyecto normativo, en virtud a la excepción establecida en el numeral 18 del inciso 28.1 del artículo 28 del Reglamento del AIR Ex Ante; por lo tanto, no se requiere realizar el AIR Ex Ante por parte de la entidad.
>
> De otro lado, en la medida que el proyecto normativo no desarrolla procedimientos administrativos bajo el alcance del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), precisamos que no se requiere realizar un ACR Ex Ante previo a su aprobación."